



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS:

**Ciudadanía y extranjeros en el constitucionalismo peruano del siglo
XIX**

PRESENTADO POR:

Bach, Vega Pérez Adriano Evaristo

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

ASESOR:

Dr. Vargas Rodríguez César

LAMBAYEQUE, 2020

Tesis denominada “Ciudadanía y extranjeros en el constitucionalismo peruano del siglo XIX”, presentada para optar el título de abogado, por:

.....
Bach. Vega Pérez, Adriano Evaristo

.....
Dr. Vargas Rodríguez, César
ASESOR

APROBADO POR:

.....
Dr. Vélchez Velez,
Oscar Ramón
JURADO

.....
Dr. Hernández Rengifo,
Freddy Widmar
JURADO

.....
Dr. Yzquierdo Hernández,
Leopoldo
JURADO

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA N° 254

Sustentación para optar el Título de Abogado de don: **Adriano Evaristo Vega Pérez.**

En la ciudad de Chiclayo, en la Auditorio "José Antonio Silva Vallejo" del Consultorio Jurídico Gratuito de Chiclayo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; siendo las 11:00 a.m. del día viernes 24 de enero del 2020, se reunió el Jurado conformado por los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Mag. OSCAR VILCHEZ VELEZ.
SECRETARIO : DR. FREDDY HERNANDEZ RENGIFO.
VOCAL : Mag. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNANDEZ.

Con el objeto de calificar la sustentación del Bachiller **Adriano Evaristo Vega Pérez**, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mediante la Modalidad de Presentación, Sustentación y Aprobación de Tesis.

El señor Presidente invita al sustentante para que exponga la Tesis titulada: * **CIUDADANÍA Y EXTRANJEROS EN EL CONSTITUCIONALISMO PERUANO DEL SIGLO XIX.**

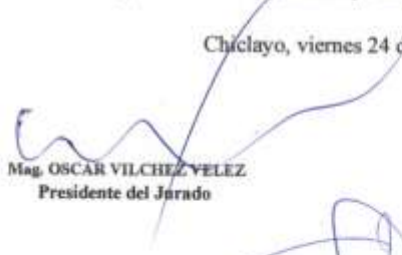
Rendido por el bachiller: **Adriano Evaristo Vega Pérez**, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", autorizado con Resolución N° 108-UI-FCP-UNPRG, de fecha 22 de enero del 2020, en cumplimiento al requisito para optar el Título Profesional de ABOGADO, exigido en el Reglamento del Vicerrectorado de Investigación y de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho.


Obteniendo el siguiente resultado: Aprobado con la nota de 17.52 y el calificativo de Bueno y apto para obtener el Título Profesional debiendo cumplir con las exigencias de las normas legales vigentes.


Siendo las 11:58 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado la presente acta.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinente.

Chiclayo, viernes 24 de enero del 2020.


Mag. OSCAR VILCHEZ VELEZ
Presidente del Jurado


DR. FREDDY HERNANDEZ-RENGIFO
Secretario del Jurado


Mag. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNANDEZ
Vocal del Jurado.

Dedico esta tesis a mi querida madre Luz Aurora, por su infinito amor y preocupación constante.

A mi padre Adriano, por su fortaleza e ímpetu para salir adelante y mostrarme el camino del Derecho.

A mis madres, Nélida, María y Rosa, por su apoyo permanente y sus enseñanzas a lo largo de mi vida.

A mis hermanas, Lía, Rebeca y Matilde, por la paciencia, la confianza y el impulso a seguir adelante.

Sin ellos no sería lo que soy, los amo infinitamente.

Mi agradecimiento a Dios

A mis tíos Idelso y Felipe, y a mi hermano Sésil, que, a pesar de las dificultades en su vida diaria, se concedieron un tiempo para brindarme sus sabios consejos y apoyo permanente en momentos difíciles.

A Lucero, por su cariño y comprensión constante.

A Andy, Jani y Ruth, por su apoyo, lealtad y fortuna de nuestra amistad.

A Iustitia Legis, institución que me ha brindado las mejores satisfacciones académicas, personales y profesionales.

A todas aquellas personas que me acompañaron en mi vida universitaria, por sus consejos y confianza.

Todos son artífices y parte de mi formación personal y profesional.

INDICE

| | |
|----------------|-----|
| Dedicatoria | i |
| Agradecimiento | ii |
| Índice | iii |
| Resumen | v |
| Abstrac | vi |
| Introducción | 7 |

CAPÍTULO I - ASPECTOS METODOLÓGICOS

| | |
|---|----|
| 1. Realidad problemática | 9 |
| 1.1. Planteamiento del problema | 9 |
| 1.2. Formulación del problema | 10 |
| 1.3. Justificación e importancia del estudio | 11 |
| 1.3.1. Justificación del estudio | 11 |
| 1.3.2. Importancia del estudio | 13 |
| 1.4. Objetivos | 13 |
| 1.4.1. Objetivo general | 13 |
| 1.4.2. Objetivos específicos | 14 |
| 1.5. Hipótesis | 14 |
| 1.6. Variables | 15 |
| 1.6.1. Variable independiente | 15 |
| 1.6.2. Variable dependiente | 15 |
| 1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos | 15 |
| 1.7.1. Métodos | 15 |
| 1.7.1.1. Métodos generales | 15 |
| 1.7.1.2. Métodos específicos | 16 |
| 1.7.2. Técnicas | 16 |
| 1.7.3. Instrumentos | 16 |

CAPÍTULO II – ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|----|
| 2. Marco conceptual | 18 |
| 2.1. Cuestión terminológica de ciudadanía | 18 |
| 2.1.1. El concepto de ciudadanía en la historia | 18 |
| 2.1.2. El concepto de ciudadanía | 20 |
| 2.1.3. Nacionalidad y ciudadanía | 23 |
| 2.2. La ciudadanía en el contexto histórico peruano | 25 |

CAPÍTULO III – ANÁLISIS Y RESULTADOS

| | |
|--|----|
| 3. Constitución y legislación | 30 |
| 3.1. De la constitución de Cádiz a la Convención de 1834 | 30 |
| 3.1.1. Las cortes de Cádiz | 30 |
| 3.1.2. El estatuto provisional de 1821 | 34 |
| 3.1.3. Constitución Política del Perú de 1823 | 38 |
| 3.1.4. Constitución Política del Perú de 1826 | 41 |
| 3.1.5. Constitución Política del Perú de 1828 | 44 |
| 3.1.6. Constitución Política del Perú de 1834 | 50 |

| | |
|---|----|
| 3.2. Del fin de la confederación a la constitución conciliadora de 1860 | 55 |
| 3.2.1. Constitución Política del Perú de 1839 | 55 |
| 3.2.2. Estatuto Provisorio de 1855 y la constitución de 1856. | 60 |
| 3.2.3. Constitución Política del Perú de 1860 | 62 |
| Conclusiones | 65 |
| Recomendaciones | 66 |
| Bibliografía | 77 |
| Anexos | 85 |

RESUMEN

Los diversos y escasos trabajos académicos de historia constitucional desarrollados en los últimos años, han abordado cuestiones importantes como ciudadanía desde una visión general y enfocada por su propia naturaleza a la historia del Perú, el sufragio universal, femenino, entre otros temas; sin embargo, la investigación vinculada al ejercicio de la ciudadanía extranjera ha dejado un margen importante para la academia debido al interés público actual que hoy genera la inmigración, cuestionándose hoy en día diversos aspectos jurídicos y sociales en el estado constitucional. En ese sentido, el presente trabajo persigue analizar la construcción y el tratamiento de la ciudadanía extranjera en el constitucionalismo peruano del siglo XIX.

Palabras Clave:

Ciudadanización, derechos, historia constitucional, inmigrantes, siglo XIX

ABSTRACT

(Traducción del resumen al idioma inglés)

The diverse and scarce academic works of constitutional history developed in the last years, have approached important questions like citizenship from a general vision and focused by its own nature to the history of Peru, the universal suffrage, feminine, among other subjects; nevertheless, the investigation linked to the exercise of the foreign citizenship has left an important margin for the academy due to the current public interest that today generates the immigration, questioning nowadays diverse juridical and social aspects in the constitutional state. In this sense, this paper seeks to analyze the construction and treatment of foreign citizenship in the Peruvian constitutionalism of the nineteenth century.

Keywords

Citizenship, rights, constitutional history, immigrants, 19th century

INTRODUCCION

Tomando en cuenta la importancia de la historia constitucional en el desarrollo del estado constitucional y la lucha que implica la reconstrucción de la evolución histórica de instituciones jurídicas y el reconocimiento de derechos fundamentales con el fin de ser comprendidas de acuerdo a su tiempo y espacio, la presente investigación se encamina al análisis de la construcción y el tratamiento de la ciudadanía extranjera en las constituciones peruanas del siglo XIX y sus normas reguladoras. En dicho contexto, hoy en el Perú se vive un fenómeno migratorio de amplia magnitud, siendo uno de los países que más migrantes ha recibido en los últimos años respecto a América Latina, lo cual ha generado un debate interesante respecto a sus derechos ciudadanos que les asiste y cómo estos han venido forjándose en el ordenamiento jurídico peruano desde sus orígenes como república.

La característica principal de esta forma de adquisición de derechos, ha sido la de cumplir ciertos requisitos establecidos desde las primeras constituciones peruanas, contando incluso con su antecedente más importante como lo es la constitución Gaditana, el estatuto provisorio del General San Martín y la primera constitución de 1823, entre otras cartas constitucionales hasta la de 1860 y con ellas, leyes no enumeradas (característica de las leyes del siglo XIX) que establecían los procedimientos y formalismos con el fin de adquirir la nacionalidad peruana.

En base a lo descrito, es relevante preguntarnos ¿Cuáles han sido los procedimientos y las características establecidas en las constituciones peruanas y normas reguladoras del siglo XIX con el fin de obtener la ciudadanía peruana por parte de los no nacionales o extranjeros?,

dicho esto, es complicado, pero no imposible la reconstrucción histórica de esta figura.

Tanto las constituciones y las normas legales analizadas, responden a un contexto histórico, social, económico y cultural, por ello ha sido indispensable acudir a la literatura especializada con el fin de realizar una investigación transversal con las limitaciones que la misma implica. Tal es así que, Manrique (1991), ha señalado con mucha razón: “En un balance de las investigaciones sobre historia peruana anteriores a la década del setenta llama la atención el escaso interés que suscita el siglo XIX. Con la excepción de la monumental Historia de la República del Perú de Jorge Basadre” (p. 241). La situación es similar en una disciplina de corta data como la historia constitucional, tal como lo ha descrito Jamanca (2003), los estudios en materia de historia constitucional peruana referidas al siglo XIX no han sido abordados de manera significativa, salvo algunas excepciones (p, 402-404). Ello justifica la importancia de nuestra investigación.

CAPITULO I

I. ASPECTOS METODOLOGICOS.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.

1.1. Planteamiento del problema.

En la actualidad nuestro país viene afrontando un fenómeno migratorio amplio e importante, por lo que representa de interés social y académico la investigación en materia de derechos fundamentales vinculados a los migrantes o extranjeros. En esa línea de argumentación, se torna necesario ir a las bases u orígenes de la construcción de la ciudadanía extranjera en el constitucionalismo peruano del siglo XIX.

Abordar el status constitucional de los migrantes o extranjeros se torna sumamente interesante, mayor aún a partir de la formación y desarrollo de las repúblicas latinoamericanas; posterior a la independencia de la otrora poderosa España, la migración se ha convertido en un problema global que implica relaciones bilaterales o multilaterales entre diversos países del mundo; aunado a ello, la migración ha jugado un rol importante en la formación y construcción de la ciudadanía en la historia del Perú, marcando un hito importante que hoy deriva en un país multicultural; y como último agregado, la nacionalidad y ciudadanía siempre han estado asociado a los derechos humanos, pero sobre todo a la ahora en boga constitucionalización del derecho.

Por lo anteriormente descrito, no encontramos trabajos que hayan abordado la construcción de ciudadanía de los extranjeros o en todo caso el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de los extranjeros en las cartas constitucionales del siglo XIX; solo se encuentran algunos comentarios a las constituciones del referido siglo y todo ellos abocados al estudio de otros temas no vinculados con la ciudadanía, nacionalidad o consecución de los derecho políticos de los no nacionales en el constitucionalismo peruano del siglo XIX.

Los derechos políticos de los extranjeros están vinculado al ejercicio de sus derechos fundamentales y la efectividad de los mismos; de ahí el interés por el estudio en mención y la reminiscencia a las bases constitucionales de las mismas que nos permita identificar el tratamiento otorgado a los extranjeros al culminar la independencia y sus antecedentes más próximos, Considerando la posición del extranjero en la constitución del Perú y el reconocimiento de sus derechos fundamentales a lo largo del siglo XIX.

1.2. Formulación del problema.

De lo arriba descrito se desprende nuestra PREGUNTA PRINCIPAL

¿Cuáles fueron los procedimientos y características establecidas en las constituciones peruanas y normas reguladoras con el fin de obtener la ciudadanía peruana por parte de los no nacionales o extranjeros durante el siglo XIX?

1.3. Justificación e importancia del estudio.

1.3.1. Justificación del estudio.

La presente investigación persigue el análisis en cuanto a la construcción de la ciudadanía en el contexto histórico constitucional del siglo XIX, específicamente en cuanto a la ciudadanía adquirida por parte de las personas extranjeras que fueron migrando al país por diversas circunstancias o aquellas que se quedaron en el País, posteriormente a la independencia. Para ello, se ha tomado en cuenta precisar el concepto de ciudadanía no solo desde el punto de vista teórico, sino también histórico y el algunos aportes respecto a la nacionalidad y el tratamiento que le ha dado la academia a las principales diferencias entre nacionalidad y ciudadanía desde los inicios en Grecia, pasando por Roma y posteriormente las revoluciones tanto francesas como americanas, asimismo, el tratamiento de la ciudadanía en los inicios de las diversas repúblicas de américa latina. En cuanto a la investigación, se ha creído conveniente realizar la división en tres etapas, las mismas que están constituidas la primera desde el año de 1821 con el estatuto provisorio hasta la Constitución de 1834, la segunda desde 1839 hasta 1860 y la tercera desde 1860 hacia fines del siglo, la misma que se caracterizó principalmente por una de las mayores migraciones como la China, migración que permitió a determinados miembros del Club Progresista como Elías, tener el control de la mano de obra y generar fortunas destacadas. Un punto adicional es que el Club Progresista, se constituiría en la semilla o germen del Partido Civil dirigido por Manuel Pardo, partido constituido en su gran mayoría por miembros de la Oligarquía peruana.

La revolución francesa, americana y la misma Constitución de Cádiz, se van a constituir en una

gran influencia en la formación de los nuevos estados, tal es así, que será en América incluso donde se hará común el trato de ciudadanos antes que en España donde se les seguía llamando súbditos o vasallos, en América adquieren derechos y obligaciones a través de procedimientos y formalidades aún incipientes, pero de cierta forma con apertura a una ciudadanía mínima. Así, por ejemplo, encontramos trabajos en los cuales destacan el derecho al sufragio en sus inicios de la república peruana, la participación política en cuanto a la elección de representantes para la Constitución de 1823, y otros aportes significativos. Sin embargo, de todos los trabajos revisados, muy pocos abordan el tema de la ciudadanía desde una perspectiva histórico constitucional y se ciñen a datos históricos sin la revisión exhaustiva de decretos, leyes o artículos de las Constituciones, lo cual nos permite abordar el tema con mayor entereza y profundidad.

Debemos acotar que el estudio de los artículos referentes a la ciudadanía en las Constituciones del siglo XIX, no el único elemento que aporta a la investigación, por ello, se recurre a distintas herramientas bibliográficas, las mismas que han permitido establecer una conexión académica – histórica – legal y constitucional, tomando en cuentas el contexto económico, político y social en los cuales se promulgó cada Constitución. Podemos extraer preguntas como, por ejemplo: ¿Cuáles fueron los factores de mayor influencia en cuanto al concepto de ciudadanía y su relación con la adquisición de la misma por parte de extranjeros?, ¿Ha existido una preocupación en cuanto a la misma a lo largo del siglo XIX?, ¿cuáles fueron los derechos que se le reconocieron a los extranjeros al otorgarles la ciudadanía? Por ello se analizó diversos artículos de las Constituciones, estatutos provisionales, reglamentos, decretos y algunas resoluciones emitidas por el gobierno peruano, con lo cual esperamos brindar un acercamiento en cuanto a la ciudadanía extranjera y su tratamiento en el ordenamiento legal peruano.

1.3.2. Importancia del estudio.

Tal como han citado diversos autores en cuanto a la importancia de la historia constitucional a fin de comprender las instituciones jurídicas, se torna imprescindible el estudio en cuanto a la formación y construcción de la ciudadanía vinculada a la obtención por parte de los extranjeros durante el siglo XIX, tomando como aportes diversas ramas de investigación como la historia, el derecho, la antropología y otras ramas afines, constituyéndose en una investigación de corte transversal.

Además, es un trabajo pionero que busca visualizar una temática importante en los estudios de historia constitucional, tal como los derechos políticos de los extranjeros en una época histórica en la cual se construía la república peruana.

1.4. Objetivos.

1.4.1. Objetivo General.

Comprender los procedimientos y características establecidas en las constituciones peruanas y normas reguladoras con el fin de obtener la ciudadanía peruana por parte de los no nacionales o extranjeros durante el siglo XIX.

1.4.2. Objetivos Específicos.

- Establecer las definiciones conceptuales de ciudadanía y nacionalidad a lo largo de la historia constitucional del Perú del siglo XIX.

- Analizar los procedimientos y características que sustentaron la adquisición de la ciudadanía por parte de los no nacionales o extranjeros, tanto en las diversas Constituciones, como en las diferentes normas reguladoras emitidas a lo largo de la historia constitucional del Perú, durante el siglo XIX.

- Determinar los alcances y límites respecto a La adquisición de la ciudadanía por parte de los no nacionales o extranjeros, para lo cual se analizó los procedimientos y características de las diferentes cartas constitucionales y normas reguladoras del Perú, correspondientes al siglo XIX.

1.5. Hipótesis.

Frente al problema de investigación, planteado de la siguiente manera:

¿Cuáles fueron los procedimientos y características establecidas en las constituciones peruanas y normas reguladoras con el fin de obtener la ciudadanía peruana por parte de los no nacionales o extranjeros durante el siglo XIX?

Como hipótesis central consideramos que la obtención de la ciudadanía por parte de extranjeros o no nacionales en el Estado Peruano del siglo XIX, ha implicado a lo largo de la historia

constitucional, la adopción progresiva de procedimientos y características que respondan a las circunstancias y necesidades jurídico – socio – políticas, incorporándose las mismas en las diferentes constituciones y normas reguladoras (aspecto formal), y, concretándose a partir de la efectividad de las mismas por parte las entidades autorizadas para dicho fin (aspecto material); mostrándose una evolución a partir del concepto de ciudadanía y el tratamiento en cuanto a los derechos políticos de los extranjeros.

1.6. Variables.

Ciudadanía y extranjeros

1.6.1. Variable independiente.

Ciudadanía

1.6.2. Variable dependiente.

Extranjeros

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

1.7.1. Métodos.

1.7.1.1. Métodos generales.

- El Método Dialéctico: Se realizó análisis crítico de las percepciones y teorías de diversas

fuentes nacionales y extranjeras.

- El Método Histórico-comparativo: Se realizó una comparación de la semejanza de los casos bajo análisis.
- El Método Inductivo: Se utilizó el razonamiento para formular conclusiones generales.

1.7.1.2. Métodos específicos.

- El Método de la observación.
- El Método dogmático.
- El Método sociológico
- El Método exegético

1.7.2. Técnicas.

- Documentales.
- Observación.

1.7.3. Instrumentos.

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.

- El fichaje.

CAPITULO II

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. Cuestión terminológica de ciudadanía

2.1.1. El concepto de ciudadanía en la historia

Hurgar en los orígenes del concepto de ciudadanía, nos lleva indefectiblemente a la antigua Grecia y sus instituciones jurídicas y políticas que aún persisten en el mundo actual. Roma sería el espejo histórico y Estados Unidos se constituiría en el modelo actual, una vez obtenida su independencia. La asociación de la ciudadanía con los derechos políticos, tiene sus orígenes en Grecia. En la actualidad, algunos autores la definen como “Vínculo filosófico espiritual y legal con la característica de pertenencia a una cultura política exclusiva propia del mundo grecolatino” (Aláez, 2005, p.35). Por su parte, otros autores consideran que esta ciudadanía, asociada a los derechos políticos, es una asociación aparente, ya que “tanto mujeres como esclavos, ancianos, extranjeros, trabajadores manuales y las sirvientas domésticas, quedaban excluidos, siendo considerados únicamente los varones” (Martín y Vicente, 2001, p. 145).

El concepto de ciudadanía asociado a la participación política, va a variar con fines políticos en Roma “diferenciándose entre un sentido fuerte de ciudadanía y un sentido débil, acentuándose este último a partir de la extensión legislativa a mayor cantidad de individuos que se encontraban sometidos al poder de roma (Klusmeyer, 1996, p. 20). Y también en roma se irá forjando el

antecedente de nacionalidad (Individuo – estado), al constituir la ciudadanía romana, una ciudadanía basada en derechos socioeconómicos y no participativos, en resumen, “una ciudadanía pasiva y legal, asociada al posterior concepto de la nacionalidad” (Zapata, 2001, p. 57). En la edad media, el concepto va a seguir extendiéndose y el cristianismo juega un rol importante al “sustituir las recompensas políticas y económicas que se traducían en la participación activa de los ciudadanos en Grecia de forma excluyente y el sentido de pertenencia en Roma de forma excluyente (Zapata, 2001, p. 59). Dando paso a una ciudadanía con base socioeconómica, sin embargo, debemos recordar que en la ciudadanía romana “se permitía el testamento, patria potestad y sufragio, excluyéndose a los extranjeros, que se les aplicaba el *Ius Gentium*, a través del *praetor peregrinus* (Medina, 2001, p. 323).

En la edad moderna, el concepto se sigue extendiendo con mayor fuerza por las revoluciones tanto francesa como americana, la mismas que buscarán dejar de lado los términos de “súbdito o vasallo, que se habían impuesto en el feudalismo” (Medina, 2001, p. 323). El principio de soberanía y la aparición de los estados nación, surgido en la “Universidad de París con el fin de identificar a un grupo de estudiantes con la misma lengua y que hacían uso del comedor de manera grupal, identificándolos como italianos, españoles o alemanes” (Medina, 2001, p. 323). Van a sumar en favor de ello. Sin embargo, la revolución francesa que propugnará la “eliminación de diferencias históricas en cuanto al sufragio, basado en la propiedad, clase o educación” (Linares, 2003, p. 30). No tendrá un verdadero carácter universal. Incluso, la revolución americana, será “una ciudadanía civil al alcance de todos y una ciudadanía política restringida, excluyendo la primera a los esclavos” (Miralles, 2009, p. 11). Sieyès, uno de los personajes más importantes de la revolución francesa, será el artífice de “la separación entre derechos civiles como ciudadanía pasiva y los

derechos políticos como ciudadanía activa, haciendo exclusiva a la segunda y general a la primera” (Miralles, 2009, p. 12). Siendo esto último aprobado por la asamblea nacional, excluyendo mujeres y personas que no tenían capacidad económica (pago de impuestos), siendo Robespierre quien se opondría a ello, abogando por una ciudadanía sin restricciones

Sin embargo, el concepto aún no va a ser del todo claro y la segmentación y ciudadanía va a seguir siendo elitista (blancos, propiedad, entre otras). El problema de ser ciudadano, sobre todo en América va a ser un problema latente en base a formalidades y lugar de nacimiento (territorio). La universalización de la ciudadanía seguirá siendo una utopía y los principales afectados en estas circunstancias y épocas, serán los migrantes o extranjeros que, convencidos de una ciudadanía universal y el reconocimiento de la misma en la declaración universal, van a estrellarse con una realidad distinta a la imaginada.

2.1.2. El concepto de ciudadanía

El concepto de ciudadanía, evoca un conjunto de derechos que vincula al individuo y al estado, siendo estos derechos tanto los civiles, políticos, sociales y económicos. Al respecto, Marshall, citado por Gordon, define a la ciudadanía “como un status que brinda como principal característica el ser parte de una sociedad, en base a derechos civiles, políticos y sociales”. (Gordon, 2001, p. 3). Por su parte, otros autores la han definido desde una perspectiva de diferenciación “en el sentido de la importancia de saber lo que se entiende por ciudadano, tanto en sus características y su distinción con otros estratos (p.16). Desde una visión económica, se le ha definido como un “proceso de inmigración, que se constituye en un problema económico y político” (Miravet, 2006,

p. 2). No podemos dejar de mencionar el vínculo entre democracia y ciudadanía en base a la articulación que se vislumbra de los diversos conceptos “jugando un rol importante, debido a la producción de una forma política efectiva para un territorio determinado dentro de un estado democrático” (O’Donell, 1993, p. 5). De todo ello, nos resulta importante destacar la definición del profesor Antonio Pérez Luño, al establecer que la ciudadanía “es un conjunto de normas que van a regular el status jurídico – político de los ciudadanos y que provienen del derecho positivo estatal” (Pérez Luño, 2002, p. 178).

En el debate contemporáneo, el comunitarismo plantea una estrecha relación de origen y necesaria entre comunidad y sus miembros, definiéndose como “un concepto que hace de la ciudadanía el corazón mismo de nuestra vida” (Walzer, 2001, p. 162). Por el contrario, “el liberalismo propone una concepción netamente política, en el cual la relación se concreta a partir del pacto social y pertenencia libre de las personas con la sociedad” (Rawls, 1993). Otros autores importantes, también han planteado alternativas, como, por ejemplo, “la ciudadanía social que debe responder a las exigencias y las necesidades del individuo en su desarrollo personal como respuesta a la ciudadanía liberal” (Marshall, 1998). Al respecto, al día de hoy, “se suele asociar a la ciudadanía con los derechos humanos y el estado de derecho” (Peces Barba, 2003). Constituyéndose al día de hoy y desde el estado de derecho como forma política mediante la cual actúan los poderes públicos siempre de acuerdo a la legalidad que se va a encargar de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tal es así que “el estado de derecho se legitima a través de la concreción de los derechos fundamentales, llenando de contenido a la ciudadanía y ésta a su vez, se concreta mediante la participación política” (Pérez Luño, 2003, p. 212). Pérez Luño, también recurre a personajes de la talla de D’Alambert y Diderot, para recurrir a un concepto que dotó de contenido

a la ciudadanía, definiéndola ambos como “ciudadano: es miembro libre que forma parte de una sociedad con numerosas familias y que participan en esta sociedad (Diderot y d’Alambert, 1751 – 1765, p. 16). Excluyendo a sociedades arbitrarias o tiránicas y priorizando la voluntad como sentido de adherencia al pacto social, dando paso a la ciudadanía adquirida y la ciudadanía por nacimiento ya que nadie puede a otra persona, obligar a pertenecer a una sociedad que no desea y tiene derecho a optar por la que crea conveniente (emigración).

Pérez Luño, también citará a Kant en cuanto a la construcción conceptual de ciudadanía, al resaltar la “Libertad como hombre, igualdad e independencia como ciudadano que van a concretar la constitución de acuerdo a los principios de la razón pura” (Pérez Luño citando a Kant, 2003, p. 186). De estas ideas se desprende la ciudadanía como “un vínculo de pertenencia a un estado de derecho por parte de los nacionales que cuentan también con derechos y deberes y al ciudadano como aquella persona física que es el titular de la situación jurídica descrita” (Pérez Luño, 2003, p. 186). Sería la escuela alemana la que va a diferenciar entre ciudadanía en sentido estricto y la general al establecer “la ciudadanía en sentido genérico (*status civitatis*) y la ciudadanía en sentido estricto (*status activae civitatis*) correspondiente a los derechos políticos tales como el voto o sufragio tanto desde una perspectiva activa y pasiva” (Jellinek, 1964, p. 81). Desde el marxismo, la crítica hacia la ciudadanía liberal se torna en base a la exclusión por bienes o posiciones socioeconómicas, raza, género o nivel educativo y va a plantear “ampliar el concepto de ciudadanía a un status de miembro pleno de la comunidad y no solo circunscrito a los derechos políticos, adicionando a estos últimos, la una perspectiva social que sea efectiva en el uso y disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales (Marshall, 1998, p. 88). Rescatando la importancia del estado social en la construcción del concepto de ciudadanía.

En virtud de lo descrito, ciudadanía se establece como el vínculo que va a relacionar al individuo con el estado al cual pertenece, este sentido de pertenencia lo convierte en partícipe de los procesos de elección de autoridades mediante el voto, el cumplimiento de leyes y de normas que rigen la vida social, el pago de impuestos y la exigencia en cuanto a la transparencia y el uso de bienes estatales. El ciudadano va a identificar problemas y proponer soluciones por ejemplo en el cuidado del medio ambiente y del legado histórico, aportando tiempos y recursos en bien de la comunidad.

2.1.3. Nacionalidad y ciudadanía

Es importante el planteamiento respecto a la ciudadanía y nacionalidad, ya que, en el estado liberal, ciudadano era lo mismo que ser nacional, sin embargo, el multiculturalismo y las circunstancias como inmigración han vaciado de contenido aquella equivalencia, no siendo aplicable a tiempos actuales. Debemos tomar en cuenta que “la ciudadanía se va a diferenciar por su componente de los derechos políticos que la convierte en activa y la nacionalidad va a conservar el sentido pasivo, cumpliendo una función excluyente debido a no prestar el consentimiento y no integrarse en calidad de nacionales” (Pierre, 1992, p. 45-55). Siendo la nacionalidad una condición que otorga reconocimiento a una persona, respecto a un estado o nación en sus diversas formas como el *ius soli*, *ius sanguinis* y *ius domicili*. Debiendo advertir que “Francia sí diferenciaba entre nacionalidad y ciudadanía, al igual que España, siendo Italia la que no fijaba estas diferencias de influencia liberal - conservadora” (Aláez, 2005, p. 60-61).

En tiempos del constitucionalismo español, se destaca la etno – culturalización, la misma que “distancia a la nacionalidad de la ciudadanía, en un proceso de objetivación (Aláez, 2005, p. 62-

63). Ya encontrándose en la Constitución de 1845 la diferencia marcada entre nacionalidad y ciudadanía al “distinguir aquellos derechos de los cuales van a disfrutar aquellas personas nacionalizadas a través de la carta de naturaleza o vecindad y el procedimiento respectivo” (Rozas & Campos, 1987, p. 69). Al día de hoy, una de las definiciones más utilizadas es la descrita por la ACNUR, que ha definido a la nacionalidad como “Vínculo entre un estado, sus leyes y el individuo, un vínculo que comprende derechos políticos, económicos, sociales y otros derechos, así como las responsabilidades por parte del gobierno y de los ciudadanos” (ACNUR Chile, los apátridas del mundo, preguntas y respuesta, 2006).

Ciudadanía entonces, estará asociada con los derechos políticos y el ejercicio de los mismos y nacionalidad, asociada con mecanismos para su obtención que configura procedimientos formales y otros. Sin embargo, no podemos pasar por alto que la migración también tiene sus ventajas y así lo describe Benito Aláez, al mencionar que “la mano de obra de los extranjeros contribuye a la riqueza y no deben ser excluidos o tratados de manera diferenciada, privándolos de derechos que van a incidir en la voluntad política de la cual forman parte” (Aláez, 2005, p. 69). En cuanto al estado constitucional, no podemos dejar de lado la profunda vinculación de la ciudadanía a la democracia y esta última al estado de derecho, esto ha traído consigo la eliminación de diversas barreras o limitaciones que impedían el acceso a la ciudadanía (motivaciones principalmente socioeconómicas), avanzando hacia una igualdad democrática. Esto no va a impedir que la funcionalidad tanto de la ciudadanía como de la nacionalidad, siga concretándose, pero no asociando a la nacionalidad con una pertenencia a una nación o pacto político, proponiendo que se democratice la ciudadanía, abriendo espacio a la participación política de los extranjeros con

ciertas excepciones razonables y sin dejar de vista que los derechos sociales juegan un rol importante tanto en el ejercicio de nacionalidad como de la ciudadanía.

2.2. La ciudadanía en el contexto histórico peruano

Es importante señalar que, para el presente trabajo de investigación, no podemos partir de un concepto de ciudadanía contemporáneo, sino que debemos extraer el concepto en su perspectiva histórico – cultural, durante el siglo XIX y tomando como referencia a autores peruanos que han desarrollado el tema con sumo cuidado y apreciable pulcritud. Tal es así que Núñez ratifica lo descrito al señalar que “es importante tomar en cuenta el contexto histórico referente al significado de ciudadano y vecino y su evolución durante la última etapa del virreinato y su vinculación con las cortes de Cádiz e influencia (Núñez, 2007, p. 235-237). Por su parte, el profesor Paniagua, señala que “existían visiones distintas a partir de la efervescencia de la independencia tanto desde el periódico El satélite del peruano y en contraposición el del semanario Argos constitucional de corte tradicional que impulsaba la unidad de España y América (Paniagua, 2003, p. 113-115). Aljovín, establece “la importancia de diferenciar semánticamente el término ciudadano del término vecino, asociado además al contexto histórico, cultural y social” (Aljovín, 2009, p. 179).

La ciudadanía, estaba asociada a la comunidad y la participación política, además del matiz familiar (representación familiar), como símbolo de ciudadanía durante la monarquía. Incluso asociada a cuestiones socioeconómicas: “La calidad de vecino – ciudadano estaba relacionado con la posesión de cargas y privilegios en el área local” (Aljovín, 2009, p. 180). El mismo Aljovín, citando a Palmer, “menciona que las revoluciones tanto la francesa como la norteamericana

inauguran una nueva etapa ideológica y democrática, mayor aún para Hispanoamérica en pleno auge de las independencias” (Aljovín citando a Palmer, 2009). Las dos características principales eran la “local” y contar con “privilegios políticos”, delineándose a un concepto urbano y privilegiado. El Diccionario de autoridades de (1726-1739), define a ciudadano de la siguiente manera: “Vecino es aquel que tiene acceso a determinados privilegios, en la misma medida tiene deberes como el hecho de cumplir con ciertas cargas sin excepción” (1729). La constitución de Cádiz, no mencionará nada respecto a ello. El DRAE de 1852, incorporara la frase “derechos de ciudadanía”, sin asociarse aún a la concepción de ciudadanía de los inicios de la república. Aljovín, resalta que “incluso hasta la constitución de 1845, pasando por la constitución española de 1837, se seguía confundiendo a ciudadano con vasallo o súbdito, debido a la relación histórica de la palabra ciudadano con revolución” (Aljovín, 2009, p, 183).

En la misma época, ciudadanía estaba asociado a catolicismo en cuanto a los cargos públicos y el ejercicio de los mismos. El buen comportamiento era considerado como una característica de ser un buen súbdito o vasallo, al respecto, la historia ha identificado casos como el de José Onofre Antonio de la Cadena que exigía justicia por ser un buen súbdito y el del periódico “El Mercurio de Lima de 1791, el mismo en el que un padre hace responsable del cambio de sus hijas a la democracia, debido al haber acogido las enseñanzas y aportes de la ciudadanía”; vislumbrándose la influencia de la revolución francesa y americana. Otro documento importante sería la traducción de Nariño de los “derechos del hombre y del ciudadano”, en Venezuela y luego en Colombia, llegando al Perú en una situación en la cual la revolución no era del agrado de muchos limeños. La Constitución de Cádiz, apenas discutió el tema de la ciudadanía que en términos concretos, no otorgaba igualdad social y mucho menos económica – política.

La constitución de Cádiz había considerado en su artículo 5º lo siguiente: “Son españoles: Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes cartas de naturaleza. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía” y el artículo 18º, establecía: “Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están, avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios”. Por último, el artículo 19 señalaba que: “Es también ciudadano el extranjero que, gozando ya de los derechos del español, obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano”. Declaraciones constitucionales que incluso, siendo tan limitativas, tampoco eran acatadas. Al respecto, Flores Galindo, ha resaltado lo referente a la ciudadanía indígena, al señalar “que la victoria de las guerras de la independencia no hubiera sido posible sin los indígenas y a partir de ello también se suma a la idea de incluir a la ciudadanía al indio (Flores, 1997, p. 6). Santa Cruz, sería el único caudillo militar consciente de ello.

Peralta y Rodríguez, citados por Zanatti, señalan que: “La constitución de Cádiz juega un rol importante en la formación de la nueva cultura política en Latinoamérica, adquiriendo la ciudadanía un papel trascendental en la transición de la colonia a la república, incluso este autor señala que la violencia política va a marcar la noción de ciudadanía tanto en el Perú como en Bolivia, tomando como punto de referencia el apoyo de los indígenas al general Orbegoso en la guerra civil de 1834” (Zanatti, 2005, p.195-198). Respecto a la nacionalidad, en Argentina, “se van a buscar elementos de cohesión con visión hacia el futuro, basado en la nacionalidad preexistente y el destino nacional” (Shumway, 2002, p.30-37). Es por ello, que la nacionalidad, va a jugar un factor determinante al momento de la delimitación de las naciones de Hispanoamérica.

En el caso peruano, existía un problema latente referente a la definición de “peruanos” en la cual para la oligarquía no contaban los indios que eran la gran parte de la población (Manrique, 1999, p. 245).

Ya podemos encontrar visos de esa misma concepción en Pardo y Aliaga; debemos considerar también que en aquel entonces no existía aún una gran cantidad de peruanos, ello devino en la política de inmigración que de igual forma terminó siendo discriminatoria incluso hasta fines del siglo XIX, una ley de 1893 sobre inmigración, solo permitía llamar inmigrantes a las personas de raza blanca. En aquellas épocas y ya desde los años de 1850 a 1860, las haciendas fuertes económicamente empezaron a requerir mano de obra barata debido a la migración de la población indígenas hacia las ciudades principales del País; siendo dos migraciones importantes que debemos señalar en esta época: Migración china y japonesa, ambas culturas de las cuales hoy tenemos diferentes colonias en el país y costumbres que van a terminar arraigándose como parte de la nueva patria.

Por último, respecto al mismo tema de la nacionalidad peruana, Manrique, también destaca con precisión que fue la corriente hispanista del franquismo en España la que siempre ha considerado como momento fundador de la nacionalidad peruana a la época de la colonia, considerando al siglo XIX como siglo de pase a un nuevo orden (Manrique, 1991, p.241). Así lo consideramos también, pero de forma parcial, no podemos dejar de lado la construcción de ciudadanía y nacionalidad en momentos en los cuales se formaban las repúblicas americanas, ello ya lo hemos descrito en líneas anteriores, existiendo algunos trabajos académicos al respecto. Por ello, nos inclinamos por establecer como base inicial desde la Constitución de Cádiz hasta la constitución de 1834 y una

segunda etapa o periodo desde la carta constitucional de 1839 hasta la carta de 1860 y luego la tercera desde 1860 hacia fines del siglo XIX.

CAPÍTULO III

3. Constitución y Legislación

3.1. De la constitución de Cádiz a la Convención de 1834.

3.1.1. Las Cortes de Cádiz.

Tal como se afirma respecto a las cortes de Cádiz, “El fenómeno de la independencia en el Perú se caracteriza por ser una independencia tardía debido al papel preponderante que tenía el virreinato peruano durante la colonia” (Hampe, 2009, p.28-32). Los lazos económicos entre España y Lima, eran bastante estables a pesar de las ventajas arrebatadas por el virreinato del Río de la Plata, “a pesar de verse perjudicados, los comerciantes limeños, seguían siendo conservadores y contrarios a cualquier cambio o revolución” (Chiaramonti, 2005, p.28.30). En el interior del País, sí fue notoria la afectación como en el caso de Tupac Amaru, destacando algunos autores “la rivalidad entre curacas, que permitió acabar con la revolución” (O’Phelan, 1979, p.89-98). Otros autores destacan “que la rebelión de Tupac Amaru, fue debido a la presión fiscal producto de las reformas y la muerte del corregidor De Arriaga” (Chiaramonti, 2009, p. 33). Siendo el factor principal el aspecto económico, el que marcaría la rebelión.

La revolución de Europa y la intervención de Napoleón, marcaría “La situación en la cual, Carlos VI y Fernando VII abdicarían, transformaron las nociones de legitimidad en el imperio hispano, dando paso al régimen representativo introducido por Napoleón y además de ello, dando inicio a

la emancipación de América” (Aljovín, 2018, p. 20-30). Un proceso que impuso el modelo francés y el tenue reconocimiento de derechos a los americanos. Al respecto, se sostiene que “la dominación española después de la conquista, no tenía ciudadanos sino colonos que no tenían ninguna participación en la vida política de la metrópoli” (Pacheco, 20015, p. 40). El profesor Cesar Landa, sostiene también la importancia de la Constitución de Cádiz, al establecer que “La constitución de Cádiz simboliza el inicio del constitucionalismo peruano y su estudio es importante para conocer las bases de las ideas liberales como sostén del movimiento emancipador peruano de 1812” (Landa, 2018, p. 65). Es importante mencionar que los representantes peruanos fueron Vicente Morales Duárez, Ramón Feliú, Dionisio Inca Yupanqui, Antonio Zuazo y Blas de Ostolaza.

Las características principales respecto a la constitución de Cádiz, fueron los siguientes: Supresión de todo tipo de privilegio de clase, derecho al voto para los hombres de forma indirecta y habiendo cumplido 25 años e igualdad ante la ley. Respecto a extranjeros y nacionales ya se menciona lo referente a la carta de naturaleza, señalada en los artículos 20 y 21, agregando 21 años para hijos de extranjeros y no haber salido del territorio nacional sin licencia. El artículo 18 consideraba españoles a quienes eran hijos de padre y madre españoles y con residencia en cualquier lugar de los dominios de España. A su vez, el artículo 19, brindaba ciudadanía a los extranjeros, siempre y cuando hayan obtenido la carta de ciudadanía que era otorgada por las cortes, pero para ello, deberían naturalizarse (matrimonio con española o razones socioeconómicas) o residir durante 10 años en territorio español. Quedando clara la diferencia entre la “carta de naturaleza” y la “carta de ciudadanía”, la primera era el requisito para obtener la segunda. Los extranjeros que obtenían la carta de ciudadanía, estaban impedidos de ejercer algunos cargos públicos.

CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812

CAPITULO IV

DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES

Art. 19. Es también ciudadano el extranjero que, gozando ya de los derechos de español, obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano.

Art. 20. Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con española, y haber traído o fijado en las Españas alguna invención o industria apreciable, o adquirido bienes raíces por los que pague una contribución directa, o establecidos en el comercio con un capital propio y considerable a juicio de las mismas Cortes, o hecho servicios señalados en bien y defensa de la Nación.

Art. 21. Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las Españas, que, habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veinte y un años cumplidos, se hayan avecindado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio o industria útil.

Art. 22. A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenia, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.

Art. 23. Sólo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, y elegir para ellos en los casos señalados por la ley.

Art. 24. La calidad de ciudadano español se pierde.

Primero: Por adquirir naturaleza en país extranjero.

Segundo: Por admitir empleo de otro Gobierno.

Tercero: Por sentencia en que se impongan penas aflictivas o infamantes, si no se obtiene rehabilitación.

Cuarto: Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español, sin comisión o licencia del Gobierno.

Art. 25 – El ejercicio de los mismos derechos se suspende:

Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral.

Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos.

Tercero. Por el estado de sirviente doméstico.

Cuarto. Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido.

Quinto. Por hallarse procesado criminalmente.

Sexto. Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

Art. 26 – Sólo por las causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden perder o suspender los derechos de ciudadano, y no por otras.

Debemos tomar en cuenta que en esta carta constitucional ya se señala lo referente a “La carta especial o llamada carta de naturaleza”, la misma que también será tomada en cuenta en las posteriores constituciones como requisito primordial, solicitándose para su obtención, determinados requisitos establecidos en los artículos 20° y 21°, agregando para los hijos de extranjeros la edad mínima de 21 años y nunca haber salido del territorio sin licencia, para la obtención de la carta de naturaleza.

Respecto al artículo 18, se consideraba ciudadanos a aquellos españoles que tanto por madre o padre, tengan origen en los dominios españoles y además, tenga residencia o vecindamiento en cualquier lugar perteneciente a los dominios de España. El artículo 19 brindaba la ciudadanía a los extranjeros, pero bajo la condición de haber alcanzado de las cortes, la carta especial de ciudadano; sin embargo, establece en calidad de requisito previo el gozar de los derechos de español y para ello se tenía que haber adquirido esa calidad mediante la naturalización o por residir durante 10 años en España. Lo cual nos lleva a diferenciar claramente entre la carta de naturaleza en primer orden que brindaba la calidad de español por haberse casado con española u otras razones socioeconómicas o de servicio a la nación y la carta de ciudadanía, que solo se obtenía, habiendo obtenido primero la carta de naturaleza.

La constitución de 1812, diferencia bien entre extranjeros y españoles específicamente en el artículo 19 y hace la diferencia al considerar españoles y a los ciudadanos españoles que se naturalizaban españoles primero para luego obtener la carta de ciudadanía, pero que estaban impedidos de obtener algunos cargos. Otorgándose nacionalidad en base al ius soli e ius domicili y la ciudadanía bajo condiciones y diferenciación entre aquellos que eran españoles de origen y los que eran naturalizados.

La constitución de Cádiz, representa un vuelco importante en cuanto a la ciudadanía, pero no así el reconocimiento de derechos políticos plenos, menos aún a los extranjeros, salvo el reconocimiento de una igualdad aparente entre españoles y americanos inspirada en virtud a la revolución francesa y americana, pero que no se concretaba en la práctica.

3.1.2. Estatuto Provisional de 1821.

El reconocido constitucionalista y docente universitario, Domingo García Belaunde, ha considerado dos fases o etapas en el constitucionalismo contemporáneo: “De 1780 a 1820 como una pre – historia y de 1821 a la actualidad como la etapa histórica” (García Belaunde, 1997, p. 234). De esta forma ubicamos a la constitución de Cádiz en la primera y al estatuto provisorio del General José de San Martín como el inicio de la segunda y que daría inicio a la vida republicana posterior a la proclamación de la independencia.

Un dato importante es la participación del argentino Bernardo de Monteagudo junto a José de San Martín, Monteagudo había acompañado a San Martín desde Argentina, con amplia experiencia desde la revolución de Chuquisaca y habiendo ejercido la defensa del revolucionario argentino Juan José Castelli, acompañaría a San Martín a Chile dónde redactaría el acta de independencia. Monteagudo regresaría luego al Perú ante el llamado de Bolívar, siendo asesinado en Lima, en un hecho que jamás fue esclarecido y del cual se acusó incluso a Sánchez Carrión por su confrontación de ideas respecto al establecimiento de la monarquía constitucional defendida también por San Martín o la república defendida fervientemente por Sánchez Carrión, que desde el diario “la abeja republicana” realizaba una ácida crítica hacia sus oponentes intelectuales. Ambas posiciones, tanto la monárquica como la república, tenían la misma finalidad de asegurar la institucionalidad de la naciente república peruana, pero, desde diferentes posiciones y argumentos.

Respecto a la regulación legal o status respecto a los ciudadanos no nacionales, el estatuto sí lo había previsto en la sección novena de la siguiente manera:

ESTATUTO PROVISIONAL DE 1821
(8 de octubre de 1821)

SECCIÓN NOVENA

Art. 1. Son ciudadanos del Perú los que hayan nacido o nacieren en cualquiera de los Estados de América que hayan jurado la independencia de España.

Art. 2. Los demás extranjeros podrán ser naturalizados en el país, pero no obtendrán carta de ciudadanos sino en los casos que se prescriben en el reglamento publicado el 4 del presente, que desde luego se sanciona.

Debemos tomar en cuenta que antes del estatuto provisional, San Martín había emitido un reglamento provisional, del cual, García Belaunde ha mencionado que dicho reglamento “buscaba ordenar la distribución del territorio y regular el país de manera interna ya que aún no se había proclamado la independencia” (García Belaunde, 1997, p. 235). Un documento que buscaba brindar orden en un territorio convulsionado tal como se desprende del mismo al fijar desde el inicio los fines concretos para los cuales había sido emitido.

El estatuto provisional muestra la situación real del contexto de las naciones emergentes, señalando en el primer artículo, que son ciudadanos sin distinción del lugar de nacimiento, todos aquellos que: Hayan nacido en América y, además, que hayan jurado la independencia. El artículo segundo es el más específico respecto a los no nacionales o extranjeros para adquirir la naturalización, y hace mención respecto a un reglamento sin brindar mayores detalles, este reglamento había sido publicado de octubre del mismo año y mediante el cual se regulaba los requisitos y la formalidad de la misma. Respecto a este último punto, solo se había realizado una remisión respecto al reglamento por la precisión con la cual había sido desarrollada. Toribio Pacheco ha señalado que “debido a las circunstancias, no se estableció lo referente a las formalidades en la constitución y era preferible que se encuentre en una ley, evitando cualquier reforma que implique dificultad” (Pacheco, 2015, p. 52). Este reglamento del 04 de octubre de 1821, para ser más específicos, en cuanto a ciudadanía, exigía como requisitos, cumplir 21 años y ejercer alguna industria o profesión,

en cuanto a los extranjeros naturalizados, “les exigía 25 años de edad y la cualidad de ciudadano era indispensable para ejercer un empleo público” (Pacheco, 2015, p. 52).

Otro instrumento legal importante fue el decreto emitido por San Martín declarando que los extranjeros que tenían residencia en el Perú, gozaban de los mismos derechos y obligaciones que los peruanos de nacimiento, el decreto firmado también por el secretario de estado Bernardo de Monteagudo; establecía que los extranjeros con residencia, tenían los mismos derechos que los ciudadanos del Perú y por tanto tenían derecho a la protección del gobierno y de las leyes, pero quedaban a la vez obligados a ese mismo gobierno y sus leyes; se obligaba además, a los extranjeros residentes a tomar las armas con el fin de brindar soporte al orden interno pero no a realizar la guerra contra los españoles, siempre y cuando éstos se mantengan neutrales, se obligaban también a cumplir con las mismas cargas y contribuciones que les correspondían a los peruanos en proporción de su riqueza y de los beneficios que le otorgaba la industria¹.

Otro decreto expedido al año siguiente, sobre naturalización y ciudadanía de los extranjeros, establecía que todo no nacional que arribe al país y posea además la habilidad para desempeñar un arte o ciencia, debería tener la intención de ejercer en la patria peruana y aunado a ello su ánimo de avecindarse, recibiría de forma gratuita la carta de ciudadanía siempre y cuando juramente sostener la independencia del Perú.

¹ Decreto del 17/10/1821 (Declarando que los extranjeros residentes en el país tienen los mismos derechos y obligaciones que los peruanos)

También se establecía como incentivo que todo extranjero que haya introducido alguna máquina que mejore la agricultura y labores de industria, sería exceptuado de toda contribución por el periodo de un año. Otro de los incentivos brindados por el estado peruano a fin de promover la ciudadanía de los extranjeros, estaba referido al auxilio que le otorgaba el estado a aquellos extranjeros que poseían algún arte o ciencia, pero no contaban con fondos para su ejercicio, pero este auxilio tenía que ser reintegrado al igual que el brindado a los extranjeros que se dedicaban a la agricultura². El gobierno de San Martín con la colaboración de Monteagudo, debido a la circunstancia histórica promovía fuertemente los incentivos a los extranjeros a fin de que residiesen en el Perú.

Los nacientes estados de américa del sur, buscaban institucionalizarse y fijaban la distinción entre naturales y naturalizados y con ello, los derechos y protección por parte del estado a partir del decreto protectoral del 04 de octubre, así por ejemplo, un decreto firmado por Torre Tagle y autorizado por Monteagudo, establecía tanto para los naturales como los naturalizados de los estados que se habían independizado en américa y los que sean ciudadanos, tendrían acceso a los derechos que les otorgaba el decreto protectoral del Perú, condicionado a que los naturales y ciudadanos del Perú cuenten con los mismos derechos en los países de origen de ellos. Brindándoles el goce de los derechos del decreto protectoral a los naturales y ciudadanos del imperio mexicano por el plazo de seis meses, a los de Colombia y de las provincias de Río de la Plata por el plazo de cuatro meses, a los de Chile por el plazo de tres meses y a los de Guayaquil

² Decreto del 19/04/1822 (Sobre naturalización y ciudadanía de los extranjeros)

por el plazo de dos meses³. Periodo o tiempo en el cual podrían recibir las respuestas oficiales de aquellos gobiernos.

3.1.3. Constitución política del Perú de 1823.

La Constitución de 1823, tuvo una amplia representación de abogados y clérigos, pero la elección solo fue realizada en el territorio ocupado por los patriotas, “Lima, Tarma, Huaylas, Trujillo y la costa, siendo la elección en el caso de los territorios ocupados por los españoles, en base a los residentes en Lima, teniendo derecho a voto, los que tenían renta” (Aljovín, 2018, p. 55). “Personajes de dudosa procedencia, fueron elegidos mediante circunstancias particulares como la compra de votos en el caso del diputado por Huancavelica, Manuel Colmenares, quien habría sobornado estibadores de la parada y el mercado a fin de obtener sus votos” (Aljovín, 2015, p. 56). un escenario que al día de hoy no es muy ajena a nuestra realidad, demostrando la debilidad institucional de una democracia incipiente.

El primer congreso peruano se reunió el 20 de septiembre de 1822, siendo su primera actividad el de dejar sin efecto el estatuto provisional, y procedió a asumir facultades ejecutivas y suprimió el consejo de estado de forma temporal hasta la publicación de la primera constitución peruana el 12 de noviembre, señalando respecto a la ciudadanía extranjera, lo siguiente:

³ Decreto del 26/03/1822 (Sobre derechos de naturalización, de los ciudadanos de la América Española)

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PERUANA
SANCIONADA POR EL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE EL 12
DE NOVIEMBRE DE 1823**

CAPÍTULO IV

ESTADO POLÍTICO DE LOS PERUANOS

Art. 17.- Para ser ciudadano es necesario:

- 1.- Ser peruano.*
 - 2.- Ser casado, o mayor de veinticinco años.*
 - 3.- Sabe leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después del año de 1840.*
 - 4.- Tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con título público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero.*
- Art. 20. Son igualmente ciudadanos los extranjeros casados que tengan diez años de vecindad en cualquier lugar de la República, y los solteros de más de quince, aunque unos y otros que no hayan obtenido carta de ciudadanía, con tal que sean fieles a la causa de la Independencia, y reúnan las condiciones del artículo 17.*

Art. 18. Es también ciudadano el extranjero que obtuviere carta de ciudadanía.

Art. 19. Para obtenerla, además de reunir las calidades del artículo 17°, deberá haber traído, fijado o enseñado en el país alguna invención, industria, ciencia o arte útil, o adquirido bienes raíces que le obliguen a contribuir directamente; o establecidos en el comercio, en la agricultura, o minería, con un capital considerable; o hecho finalmente servicios distinguidos en pro y defensa de la Nación: todo a juicio del Congreso.

Art. 20. Son igualmente ciudadanos los extranjeros casados que tengan diez años de vecindad en cualquier lugar de la República, y los solteros de más de quince, aunque unos y otros no hayan obtenido carta de ciudadanía, con tal que sean fieles a la causa de la Independencia, y reúnan las condiciones el artículo 17°.

Art. 21. Se moderarán estas reglas en orden a los naturales de las demás secciones independientes de América, según sus convenciones reciprocas con la República.

Art. 22. Solo la ciudadanía abre la puerta a los empleos, cargos o destinos de la República, y da el derecho de elección en los casos prefijados por la ley. Esta disposición no obsta para que los peruanos que aún no hayan comenzado a ejercer la ciudadanía, puedan ser admitidos a los empleos, que por otra parte no exijan edad legal.

Art. 23. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ya premié, ya castigué. Quedan abolidos los empleos y privilegios hereditarios.

Art. 24. El ejercicio de la ciudadanía se suspende únicamente:

- 1.- En los que por ineptitud física o moral no puedan obrar libremente.*
- 2.- Por la condición de sirviente doméstico.*
- 3.- Por la tacha de deudor quebrado, o deudor moroso al Tesoro Público.*
- 4.- Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido.*
- 5.- En los procesados criminalmente.*
- 6.- En los casados que sin causa abandonen a sus mujeres, o que notoriamente falten a las obligaciones de familia.*
- 7°.- En los jugadores, ebrios, truhanes, y demás que con su vida escandalosa ofendan la moral pública.*
- 8.- Por comerciar sufragio en las elecciones.*

Art. 25. Se pierde el derecho de ciudadanía únicamente: 1.- Por naturalizarse en tierra de Gobierno extranjero. 2.- Por imposición de pena afflictiva o infamante, si no se alcanza rehabilitación: la que no tendrá lugar en los traidores a la Patria, sin pruebas muy circunstanciadas a juicio del Congreso.

En esta carta constitucional, los requisitos para obtener la ciudadanía peruana adquirieron mayor dificultad y limitación; ya no era suficiente con la intención de ser peruano y jurar la independencia tal como lo establecía el estatuto provisorio, sino que, para ser ciudadano peruano, se debería ser

peruano, casado o mayor de veinticinco años, saber leer y escribir (requisito que se exigiría a partir de 1840) y tener una propiedad, profesión, arte o título.

En el caso de los extranjeros, estos deberían tener contar con un mínimo de diez años de residencia o estar avecindados en algún del territorio y quince años en el caso de los solteros. En el caso de aquellas personas que no contaban con la carta de ciudadanía, se remitía a los requisitos del artículo 17°, que priorizaba contar con una propiedad y no ser sirviente principalmente.

Otras características importantes de esta carta constitucional respecto a la ciudadanía, era la de tomar en cuenta las convenciones, la pérdida de ciudadanía al estar involucrado o cometer actos vinculados a la comercialización de sufragios durante elecciones y el de adquirir la nacionalidad de otro país o gobierno. Respecto a esta constitución algunos autores han establecido que fue una carta constitucional con muchas limitaciones, al establecer que “privaba de la ciudadanía a hombres que ganan el pan con el sudor de su frente y lo absurdo de los requisitos para obtener la ciudadanía por parte de los extranjeros” (Pacheco, 2015, p. 55-56).

Esta carta constitucional, como hemos analizado, tenía un carácter basado en términos económicos y señalaba diversas limitaciones como la edad, la misma que no solo era limitante para la adquisición de la ciudadanía, sino también para quienes aspiraban a tener cargo público, para lo cual se debería contar con un patrimonio o renta alta en el caso de aspirantes a diputados y propiedad con un valor alto para el caso de senadores.

Como podemos apreciar, no existe una distinción fuerte entre nacionales o extranjeros, creemos que debido a la coyuntura y circunstancia de formación.

3.1.4. Constitución Política del Perú de 1826

La constitución de Bolívar o constitución vitalicia; buscaba legitimar el poder dictatorial de Bolívar y fomentar el orden; Monteagudo había regresado al Perú ante el llamado del libertador y junto a José María Pando, un intelectual peruano que se había desempeñado en la corte española, fueron algunos de los que junto a Bolívar, aportaron a esta constitución; respecto a esta carta constitucional, se ha señalado que “ignoró la constitución de 1823 y usurpó la soberanía de la nación” (Chiaramonti, 2012, p. 2). constituyéndose en una constitución de corta duración pero que hasta el día de hoy causa diversos debates en el plano académico histórico – jurídico. El ex presidente de la República y docente universitario, Valentín Paniagua, afirma que “Bolívar habría subestimado que los elegidos diputados no serían leales a su causa, tal como ocurrió, causándole grandes problemas” (Paniagua, 2007, p. 71). El profesor Morón Urbina sostiene que “La Constitución de Bolívar siempre trajo consigo diversos debates académicos contradictorios en la academia, ello en parte a su carácter ambiguo y la asignación de un poder bastante amplio a la figura de Bolívar” (Morón, 2000, p. 174-177). En todas estas posiciones se coincide en caracterizarla como usurpadora, antidemocrática y contradictoria. Toribio Pacheco, también se suma a la crítica: “plagio ridículo de la Constitución francesa del año II, ya que Bolívar no tenía las virtudes de Napoleón y tampoco la sociedad peruana era como la francesa” (Pacheco, 2015, p.73).

Bolívar, al parecer había terminado tomando modelos de Europa que pretendía implantar en la realidad americana, cuestión que nunca ha funcionado tal como se ha demostrado a través de hechos históricos. Respecto a la ciudadanía de ciudadanía y no nacionales, señalaba los siguientes aspectos:

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1826
(1 DE JULIO DE 1826)**

**CAPITULO II
De los peruanos.**

Art. 11. Son peruanos:

- 1° Todos los nacidos en el territorio de la República.*
- 2° Los hijos de padre o madre peruanos, nacidos fuera del territorio, luego que manifiesten legalmente su voluntad de domiciliarse en el Perú.*
- 3° Los Libertadores de la República declarados tales por la ley de 12 de febrero de 1825.*
- 4° Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza, o tengan tres años de vecindad en el territorio de la República.*

Art. 12. Son deberes de todo peruano:

- 1.- Vivir sometido a la Constitución y a las leyes.*
- 2.- Respetar y obedecer a las autoridades constituidas.*
- 3.- Contribuir a los gastos públicos.*
- 4.- Sacrificar sus bienes, y su vida misma, cuando lo exija la salud de la República.*
- 5.- Velar sobre la conservación de las libertades públicas.*

Art. 13. Los peruanos que estén privados del ejercicio del poder electoral, gozarán de todos los derechos civiles concedidos a los ciudadanos.

Art. 14. Para ser ciudadano es necesario:

- 1° Ser peruano.*
- 2° Ser casado, o mayor de veinticinco años.*
- 3° Saber leer y escribir.*
- 4° Tener algún empleo o industria; o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción á otro en clase de sirviente doméstico.*

Art. 15. Son ciudadanos:

- 1° Los libertadores de la República. (artículo 11, 3°).*
- 2° Los extranjeros que obtuvieren carta de ciudadanía.*
- 3° Los extranjeros casados con peruana, que reúnan las condiciones 3 y 4 del artículo 13.*

Art. 16. Los ciudadanos de las naciones de América, antes española, gozarán de los derechos de ciudadanía en el Perú, según los tratados que se celebren con ellas.

Art. 17. Solo los que sean ciudadanos en ejercicio, pueden obtener empleos y cargos públicos.

Art. 18. El ejercicio de la ciudadanía se suspende:

- 1.- Por demencia.*
- 2.- Por la tacha de deudor fraudulento.*
- 3.- Por hallarse procesado criminalmente.*
- 4.- Por ser notoriamente ebrio, jugador o mendigo.*
- 5.- Por comprar o vender sufragios en las elecciones, o turbar el orden de ellas.*

Art. 19. El derecho de ciudadanía se pierde:

- 1° Por traición á la causa pública.*
- 2° Por naturalizarse en país extranjero.*
- 3° Por haber sufrido pena infamatoria o aflictiva, en virtud de condenación judicial.*

Cuestiones fundamentales y cambios respecto a la constitución anterior, son los referidos al reconocimiento de la ciudadanía mediante ley del 12 de febrero de 1825, a los que habían

participado en calidad de libertadores; los no nacionales deberían acceder a la denominada “carta de naturaleza” o cumplir con tres años de domiciliado en territorio peruano, siendo una diferencia bastante sustancial a la constitución de 1823; aún se exigía el requisito de la carta de naturaleza y haber nacido en cualquier lugar del territorio americano en base a convenios. El artículo 19° repetía la fórmula de la de 1823, referente a la pérdida de ciudadanía y ratificaba también la 1823, la misma que mencionaba respecto a la nacionalización en otro país, representaba la pérdida de ciudadanía peruana.

Para ser considerado peruano, se debería contar primero con la carta de naturaleza o cumplir 3 años de residencia, como mencionamos en líneas anteriores, es una diferencia bastante sustancial a la Constitución de 1823. La diferencia entre peruanos y ciudadanos, se acentúa ya que los peruanos que no accedían a los derechos políticos, sí se les garantiza los demás derechos civiles. La ciudadanía se limitaba a quienes además de ser peruano, deberían contar con más de 25 años o ser casados y contar con una profesión, arte o ciencia sin desempeñar sujeción y saber leer y escribir, sobre esto último la aplicación era inmediata a diferencia de la Constitución de 1823 que la fijaba a partir de 1840. Se diferencia también entre la carta de naturaleza que brindaba a los extranjeros la calidad de peruanos, pero no la calidad de ciudadanos, para lo cual deberían acceder o solicitar la carta de ciudadanía o estar casados con peruana y respecto a los ciudadanos de otros países, se limitaba a brindarles el trato establecido en tratados firmados entre el Perú y otros países.

3.1.5. Constitución Política del Perú de 1828.

La constitución de 1828 es la más cercana a las bases del constitucionalismo contemporáneo, al respecto, el profesor Carlos Ramos, señala sobre esta constitución como “Madre de todas las constituciones y aquella que se caracterizaba por el equilibrio de poderes y la efectiva organización estatal” (Ramos, 2018, p. 35). Las constituciones posteriores la tomarían como modelo. Por su parte, Toribio Pacheco la ha descrito de la siguiente manera respecto a sus principales características: “Se destacan de esta constitución, el consejo de estado, los requisitos para acceder a ser senador o diputado, el sistema municipal, la soberanía y las juntas departamentales” (Pacheco, 2015, p. 74-82). Y agrega el profesor Ramos, tomando los aportes de diversos investigadores, lo siguiente: “Somocurcio rescata las ideas de Luna Pizarro, Pérez Liendo menciona su carácter regionalista, Toribio Pacheco alaba el sistema municipal y Paz Soldán la califica como netamente liberal” (Ramos, 2018, p. 35-40). Lo cual denota la esencia democrática y la intención de generar la institucionalidad del Perú, la cual se vería interrumpida al establecerse su revisión cuando haya cumplido 5 años de vigencia.

Específicamente, respecto a la ciudadanía y los requisitos para obtener la misma por parte de los no nacionales, se estableció en el título II:

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PERUANA 1828
(18 DE MARZO DE 1828)**

**TÍTULO II
DE LA CIUDADANÍA.**

Art. 4. Son ciudadanos de la nación peruana:

1° Todos los hombres libres nacidos en el territorio de la República.

2° Los hijos de padre o madre peruanos, nacidos fuera del territorio, desde que manifiesten legalmente su voluntad de domiciliarse en el Perú.

3° Los extranjeros que hayan servido o sirvieran en el ejército y armada de la República.

4° Los extranjeros avecindados en la República desde antes del año veinte, primero de la independencia, con tal que prueben, conforme a la ley, haber vivido pacíficamente en ella; y se inscriban en el registro nacional.

5° Los extranjeros establecidos posteriormente en la República o que se establecieron, obteniendo carta de ciudadanía conforme a la ley.

6° Los ciudadanos de las demás secciones de América, que desde antes del año veinte se hallan establecidos en el Perú, gozarán de la ciudadanía, con tal que se inscriban en el registro nacional; y los que en adelante se establecieron, con arreglo a las convenciones recíprocas que se celebren.

Art. 5. El ejercicio de los derechos de ciudadanía se pierde:

1.- Por sentencia que imponga pena infamante, si no se alcanza rehabilitación conforme a ley.

2.- Por aceptar empleos, títulos, o cualquiera gracia de otra Nación, sin permiso del Congreso.

3.- Por el tráfico exterior de esclavos.

4.- Por los votos solemnes de Religión.

Art. 6. Se suspende:

1.- Por no haber cumplido veinte y un años de edad, no siendo casado.

2.- Por demencia.

3.- Por la naturalización en otro Estado.

4.- Por estar procesado criminalmente, y mandado prender de orden judicial expedida con arreglo a la ley.

5.- Por tacha de deudor quebrado, o deudor al Tesoro Público, que legalmente ejecutado no paga.

6.- Por la de notoriamente vago, jugador, ebrio, casado que sin causa abandona a su mujer, o estar divorciado por culpa suya.

JUNTAS DEPARTAMENTALES.

Art. 75. Son atribuciones de estas juntas:

22º Calificar a los extranjeros comprendidos en el párrafo 4º, artículo 4, e informar al Congreso sobre los demás que merezcan carta de ciudadanía.

La singularidad de esta carta constitucional es la referida a los hijos de padre o madre peruanos, quienes solo deberían manifestar su intención de domiciliarse en territorio peruano, pero de manera “legal”; también le otorgaba la ciudadanía a los extranjeros que se encontraban brindando servicio o hayan brindado servicio en el ejército; a los extranjeros que se encuentren avecindados en el Perú antes de 1820, siempre y cuando puedan probar legalmente su permanencia y domicilio de forma pacífica, además de inscribirse en el registro nacional; otro de los requisitos establecidos para los extranjeros que buscaban obtener la ciudadanía, era la de realizar el procedimiento para obtener “la carta de ciudadanía”; estos procedimientos serán regulado mediante dos leyes principales en el año 1829, principalmente referidos a la licencia de morada y la carta de ciudadanía.

En julio de 1829, mediante ley se dispuso que los extranjeros soliciten licencia de morada⁴, para ello se hacía mención al decreto emitido en marzo de 1822 respecto a las circunstancias que se exigían a los extranjeros que deseaba residir en el Perú, con esa ley se buscaba perfeccionar el

⁴ Decreto del 30/07/1829 (Disponiendo que los extranjeros soliciten licencia de morada)

decreto de 1822 para evitar cualquier dificultad para su cumplimiento. Se solicitaba a los extranjeros que dentro de seis días presentarán ante el prefecto, una declaración escrita de su habitación conteniendo nombre, destino y patria, todo ello acompañado de un pliego de sello primero; la licencia de morada no se extendía por un plazo mayor a seis meses, teniendo que refrendar por seis meses más hasta cumplir los dos años de residencia. En el caso de extranjeros que llegaban a los puertos del estado peruano y no se encontraban cerca a la residencia del prefecto, tenían que presentar su pasaporte a la autoridad local a quienes tenían que declarar la cantidad de tiempo que pensaban residir en el País, la misma que si excedía el plazo de un mes, tenían que solicitar se les otorgue licencia. También se encuentran en esta ley, sanciones y multas a aquellos que falsifiquen licencias; y, se exceptuaba a aquellos que justifiquen tener residencia de más de cinco años. La institución encargada de llevar el registro de todos los extranjeros eran las prefecturas, tanto de aquellos que ingresaban o salían del territorio de su jurisdicción y también de aquellos que obtenían permiso demorado, teniendo que dar cuenta de forma mensual al ministerio de gobierno y relaciones exteriores.

Como punto adicional, la ley establecía que los dueños de casas particulares, hospederías o fondas tendrían que notificar al inspector del barrio en un plazo de 24 horas la llegada de una persona extranjera, a su vez el inspector tenía que comunicar al gobernador y éste último a la prefectura, siendo los prefectos los principales encargados de cumplir la función y el cumplimiento de la ley respecto a la licencia de morada. Un procedimiento que buscó formalizar la migración, perfeccionado el decreto de 1822.

Respecto a la carta de ciudadanía, encontramos la ley del 30 de septiembre de 1829⁵, emitida por el vicepresidente de esa época, el ciudadano Antonio Gutiérrez de la Fuente; en la misma se desarrolla lo contenido en el párrafo 5 del artículo 4 y se establecían como requisitos para obtener la carta de ciudadanía por parte de los extranjeros, el haber cumplido 24 años y solicitar ante el prefecto del departamento correspondiente la intención de domiciliarse y además de residir durante 7 años, no comprendiéndose en esta disposición a los españoles que no reconozcan la independencia del Perú; otra forma que admitía la ley era la de casarse con peruana; si adquiría un bien inmueble que brindara con una renta anual de mil pesos o en su defecto, contar con alguna invención, industria, ciencia o arte que pueda aportar o introducir en el beneficio del País, el mismo que debería enseñar a dos peruanos para poder efectivizar la entrega de su carta de ciudadanía. El procedimiento era un tanto engorroso, se debía presentar la documentación ante el prefecto para que este lo dirija mediante informe al ministro del interior que lo presentaba ante el congreso que era el ente que concedía la carta de ciudadanía siempre y cuando exista un informe previo por parte de la junta del departamento en el que vivía el solicitante y también un informe por parte del ministro del interior que había presentado la solicitud. Si el congreso otorgaba la carta, esta era emitida de manera formal con el gran sello de la república tal como lo establecía la ley y se reconocía al extranjero, derechos civiles y políticos. Pero el procedimiento continuaba mediante la presentación por parte del extranjero beneficiado ante el prefecto o subprefecto del departamento a fin de realizar el “juramento constitucional y de obediencia al gobierno”, acto del cual, para perfeccionar la carta, debería inscribirse en la misma carta al pie en calidad de nota y presentarse ante la municipalidad para que se inscriba en el registro cívico. De esta manera, la carta de

⁵ Ley del 30/09/1829, promulgada el 02/10/1829 (Señalando los casos en que los extranjeros obtendrán el derecho y carta de ciudadanía)

ciudadanía era una gracia otorgada al ciudadano extranjero por parte del congreso de la república bajo los requisitos ya establecidos.

Asimismo, el 22 de diciembre de 1833 se expidió la ley mediante la cual se señalaba los documentos probatorios que deberían ser presentados por aquellos extranjeros que contaban con residencia en territorio peruano antes del año 1820⁶, con el fin de poder acceder a la ciudadanía; entre ellas se establecían: Informes de las autoridades y municipalidades en donde hayan residido durante la guerra de la independencia, siete testigos con evidente probidad y servicios a la causa de la independencia que deberían declarar ante la autoridad judicial del lugar de residencia del solicitante y documentos que acrediten haber realizado servicios útiles al estado durante la independencia. Se estableció el nombramiento de una comisión especial que evalúe y apertura dictamen sobre estas solicitudes, siendo las juntas departamentales las que tenían el poder discrecional de decidir si aceptaban la demanda del pretendiente y de ser así, emitían su informe que junto al expediente era elevado al congreso a través del ministerio del interior, siendo el congreso el que ordenaba en última instancia la inscripción del extranjero en el registro nacional. Un procedimiento que en el tiempo sería perfeccionado a través del registro en las municipalidades tal como lo veremos más adelante.

Aquellos extranjeros que habiendo obtenido la nacionalidad peruana y aceptaban títulos, empleos o gracias de otro gobierno, perdían automáticamente la ciudadanía peruana siempre y cuando no hayan solicitado el permiso del congreso; en caso de se hayan naturalizado en otro estado, se

⁶ Ley del 14/01/1833, aprobada el 22 de diciembre de 1833 (Ley que señala los documentos probatorios que deberían presentar los extranjeros con residencia anterior a 1820, a fin de acceder a la ciudadanía)

suspendía la ciudadanía. Otro rasgo es el referido en el artículo 75° en su sección 22°, respecto a las juntas departamentales, siendo estas las que calificaban a los no nacionales respecto a su domicilio, cuando se solicitaba la carta de ciudadanía.

Dos decretos referentes al alistamiento en los cuerpos cívicos, nos brinda también un alcance respecto a los nacionales y extranjeros y su tratamiento. El decreto del 22 de mayo de 1828⁷, señala un plazo en el que todo ciudadano estaba obligado a sostener las garantías nacionales por medios tanto poderosos y pacíficos y decreta que todo hombre ya sea libre y naturalizado o vecindado en Lima, entre 15 y 50 años debe alistarse en los cuerpos cívicos en un plazo máximo de 8 días y se excluye a los extranjeros transeúntes siempre y cuando tengan una certificación o documento de su ministerio plenipotenciario o cónsul de su país. Mientras tanto, el decreto del 19 de febrero de 1829⁸, disponía de manera general que los ciudadanos que tenga entre 15 y 50 años, sean alistados en cuerpos cívicos, exceptuando a los transeúntes extranjeros en las mismas condiciones que el decreto de 1828 y haciendo la anotación respectiva en sus pasaportes a los transeúntes que si bien no menciona como extranjeros, asumimos que se refería a ellos.

Un agregado histórico relevante es el referido a los extranjeros que deseaban ser diputados, siendo el requisito esencial el tener que cumplir con diez años de vecindad, estar casado, ser viudo o pertenecer a la iglesia católica (Eclesiástico), además de ello, se debería contar con una propiedad que se encuentre valorizada mínimamente en doce mil pesos. Toribio Pacheco, afirmó lo siguiente

⁷ Decreto del 22/05/1828 (Estableciendo plazo, para el alistamiento de los ciudadanos en los cuerpos cívicos)

⁸ Decreto del 19/02/1829 (Disponiendo que los ciudadanos desde la edad de 15 hasta 50 años sean alistados en cuerpos cívicos)

respecto a este punto: “parece una ley romana del tiempo de Augusto, ningún código moderno privaba a quien era hijo de padre oriundo, de ser ciudadano” (Pacheco, 2015, p. 76).

3.1.6. Constitución Política del Perú de 1834.

Establecida la revisión en un plazo de 5 años en la constitución de 1828 con el fin de poder superar obstáculos o algunos defectos que hayan impedido la efectividad de la constitución, en un contexto bastante difícil y con el orden imperante puesto en duda, se convoca a elecciones y de la cual saldría promulgada la constitución de 1834. Conservadores y liberales marcan el debate político, teniendo entre sus filas a José Gálvez y Bartolomé Herrera como líderes de las corrientes antes descritas. Algunos intelectuales han considerado que esta constitución interfirió el desarrollo democrático de la constitución anterior y significaba una regresión al autoritarismo, Toribio Pacheco, señalaría sobre esta constitución que “No era propicio situarnos a examinar esta constitución ya que había sido hecha bajo la férula del conquistador y quienes se reunieron, solo lo hicieron para adular al dictador” (Pacheco, 2015, p. 859)

La confrontación de conservadores y liberales tomará mayor evidencia en la convención nacional. El ex presidente de la república, Valentín Paniagua, afirma: “No representó un punto de acuerdo, por el contrario, significó una regresión a los enfrentamientos y diferencias” (Paniagua, 2000, p. 344). No solo se vislumbra un conflicto ideológico, también político y con ambición de poder. Este conflicto desencadenaría en una grave crisis que sumergió al país en uno de sus capítulos más oscuros y de regresión institucional; producto de ello fue una carta constitucional que dinamitaba la figura de la presidencia en un afán de limitar el poder del caudillo que ejercía la presidencia,

quedando sometido a mayores prerrogativas por parte del Congreso en un país en el que aún imperaba el desorden.

Dicho lo anterior, en cuanto a la ciudadanía, Paniagua Corazao, ha reafirmado que el título II, referente a la ciudadanía, “se redujo y limitó la ciudadanía otorgada en 1828, salvaguardando los derechos que hayan sido adquiridos” (Paniagua, 2004, p. 373). Rasgo importante que significaba una regresión en materia de reconocimiento de derechos. Esta Constitución, establecía lo siguiente:

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PERUANA
DADA POR LA CONVENCION NACIONAL EL DÍA 10 DE JUNIO DE 1834**

**TITULO II
DE LA CIUDADANIA**

Art. 3. Son ciudadanos de la nación peruana:

- 1° Todos los hombres libres nacidos en el territorio de la República.*
- 2° Los hijos de padre peruano, o de madre peruana, nacidos fuera del territorio; desde que se inscriban en el registro cívico en cualquiera provincia.*
- 3° Los extranjeros que hayan servido en el ejército, o en la armada de la República.*
- 4° Los extranjeros casados con peruana, que profesen alguna ciencia, arte o industria, y hayan residido dos años en la República.*
- 5° Los extranjeros que obtengan carta de ciudadanía.*

Art. 4. El ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía se suspende:

- 1. Por no haber cumplido veinte y un años de edad no estando casado.*
- 2. Por demencia.*
- 3. Por naturalización en otro estado.*
- 4. Por estar procesado criminalmente, y mandado prender de orden judicial expedida con arreglo a la ley.*
- 5. Por tacha calificada de deudor quebrado, o deudor al Tesoro Público que legalmente ejecutado no paga.*
- 6. Por la de notoriamente ebrio o jugador, o estar judicialmente divorciado por culpa suya.*
- 7. Por la profesión religiosa, mientras no se obtenga la secularización conforme a la ley.*

Art. 5. El ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía se pierde:

- 1. Por sentencia que imponga infamante.*
- 2. Por aceptar empleos, títulos o cualquiera gracia de otra Nación, sin permiso especial del Congreso.*
- 3. Por quiebra fraudulenta judicialmente declarada.*

Art. 6. Los que han perdido la ciudadanía pueden ser rehabilitados por el Congreso, motivando la impetración de la gracia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. 10. Los extranjeros que conforme a la Constitución del año veintiocho se hallan en posesión de la ciudadanía, la conservarán, aunque no estén expresamente comprendidos en el artículo.

En esta constitución, se excluye la voluntad de las personas extranjeras que deseaban domiciliar en el País que había sido establecida en la constitución anterior y en su artículo 6° señalaba que el congreso tenía la prerrogativa de rehabilitar la ciudadanía a personas que la hayan perdido; permitió, además, mantener los derechos de ciudadanía obtenidos por no nacionales durante la vigencia de la carta constitucional de 1828.

También es importante resaltar que, durante la vigencia de esta constitución, en el año de 1835, se expidió el decreto que brindaba la calidad de ciudadanos peruanos a los extranjeros que tenían la intención de lograr su inscripción en el registro cívico⁹. Este decreto que fue expedido durante la presidencia del ciudadano Felipe Santiago Salaverry, jefe supremo del Perú, disponía que la ciudadanía no estaba asociada al nacimiento en territorio peruano, reconociéndose este derecho solo por ley. En este decreto se exaltaba al hombre honrado e industrial; asimismo, asociaba el atraso del Perú con su infancia política y tomaba como ejemplo a los Estados Unidos del Norte para justificar estar en contra de los nacionalismos y patriotismo que generaban el aislamiento de la patria, exaltaba el modelo norteamericano textualmente en el decreto y llamaba a seguir las virtudes y lecciones propias de este modelo. Todo individuo de cualquier parte del mundo, era ciudadano del Perú desde el que momento que pisara tierra peruana y mostraba su intención de inscribirse en el registro cívico. Excluyendo del beneficio, únicamente a aquellas personas que no profesen industria alguna.

⁹ Decreto del 14/03/1835 (Decreto que brinda la ciudadanía peruana a los extranjeros con que deseaban inscribirse en el registro cívico)

Durante la vigencia de la Constitución de 1834, fueron expedidas diversas leyes y decretos referentes al tratamiento de los extranjeros en el estado peruano. Así tenemos el decreto del 29 de marzo de 1832, referido a la prohibición de ingreso de extranjeros viciosos o corrompidos¹⁰, el mismo que establecía velar por la seguridad del país a través de la “alta policía” e impedir el ingreso de extranjeros que puedan corromper a la población, derivando en excesos no permitidos, ordenándose que las autoridades del litoral del departamento de La Libertad, no permitirían el ingreso de extranjeros procedentes de Ecuador, mientras éstos no muestren su pasaporte, salvo los casos en los que el derecho de gentes regule tal situación no impidiendo el ingreso de extranjeros como el caso del asilo por ejemplo, excluyéndose a aquellos que abandonan su patria y buscar vivir en la patria peruana, sumidos en el ocio o buscando desestabilizar la seguridad individual que puede afectar la relación entre ambos países.

En 1832, se emitió un decreto con el fin de aprobar el voto del consejo de estado sobre los bienes testamentarios de los extranjeros¹¹, referente al caso de un ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica que había fallecido sin dejar testamento en la ciudad de Arequipa y habiéndose solicitado la disposición de los bienes por parte del cónsul con el fin de poder colocarnos en disposición de sus herederos, se le había negado dicha solicitud tanto por parte del prefecto como del juez de primera instancia. Ante tal situación, el cónsul solicitó que el caso sea revisado por el gobierno peruano y el consejo de estado determinó que la decisión de las autoridades Arequipeñas tenía como amparo normas del siglo pasado que habían brindado un trato discriminatorio frente a extranjeros, basado en los mandatos de España que buscaban mantener en el atraso a las colonias

¹⁰ Decreto del 29/03/1832 (Prohibiendo el ingreso al Perú de extranjeros viciosos y corrompidos)

¹¹ Decreto del 08/06/1832 (Aprobando el voto del Consejo de Estado sobre bienes testamentarios de los extranjeros)

de América del sur e impedir el ingreso de extranjeros que puedan generar alguna desestabilidad a la corona de España.

También el 22 de diciembre 1832, se emitió la ley que señalaba las pruebas que deberían presentar los extranjeros residentes antes de 1820, con el fin de obtener la ciudadanía, la ley fue promulgada el 14 de enero de 1833¹², estableciendo las siguientes pruebas: Informes de las autoridades y municipalidades en donde hayan residido durante la guerra de la independencia; información de siete testigos probos ante la autoridad judicial del lugar donde resida el solicitante o donde haya residido, con la citación respectiva del ministerio fiscal o síndico procurador y los documentos que acrediten haber realizado servicios útiles al estado en la causa de la independencia. Las juntas podrían recibir nueva información pública y nombrar una comisión especial para emita su dictamen, las mismas juntas tenía que meritara la solicitud y dar cuenta al Congreso de la República, este último se encargaba de ordenar la inscripción en el registro nacional.

En cuanto a otras prerrogativas y limitaciones a extranjeros, se encuentra un decreto de 1833, mediante el cual se prohíbe a los extranjeros la pesca de cetáceos y anfibios en playas e islas del Perú¹³; brindándose la autorización exclusiva a los ciudadanos del Perú. Ello a raíz de la intervención de buques extranjeros que buscaban realizar pesca en mar peruano sin contar con permisos e invadiendo la propiedad y privando por la fuerza a los naturales del Perú de sus recursos naturales que les permite abastecerse para el autoconsumo y la venta. La ley brindaba la calidad de contrabandistas a aquellos buques extranjeros, quedando claro que no buscaba limitar a los

¹² Ley del 14/01/1833 (Señalando las pruebas que deban presentar los extranjeros residentes en la República antes del año de 1820, para obtener la ciudadanía)

¹³ Decreto del 06/09/1833 (Prohibiendo a los extranjeros, la pesca de cetáceos y anfibios en las playas e islas del Perú)

extranjeros avecindados en el Perú, sino a aquellos que intervenían en la pesca de manera ilegal ya que un ciudadano peruano también podría ser un extranjero que haya cumplido los requisitos para acceder a la ciudadanía peruana.

Otro decreto de 1838, regulaba la expedición de pasaportes para extranjeros¹⁴, ello con la finalidad de mantener las buenas relaciones con otros países y evitar cualquier situación que pueda menoscabar el orden público. Se tomaba la base legal referente a la normativa de diversos países que no otorgaban pasaportes mientras no se cuente con el consentimiento de los representantes de sus respectivas naciones, de tal forma que se fijó la obligación de visar y sellar tanto por los ministros diplomáticos, cónsules o vice – cónsules de los estados que pertenezcan los individuos que los soliciten. También se agregó la prohibición de embarcarse a cualquier extranjero que no cuente con los requisitos antes descritos.

3.2. Del fin de la Confederación a la Constitución conciliadora de 1860.

3.2.1. Constitución Política del Perú de 1839.

Habiendo triunfado Gamarra en el conflicto interno, mediante esta constitución trató de modificar los cambios establecidos en la constitución de 1834 que habían limitado la figura presidencial; También significó el fin de la confederación peruano – boliviana, configurándose la prohibición de asociación con otro estado. Nos encontramos en una época de la historia en la cual el

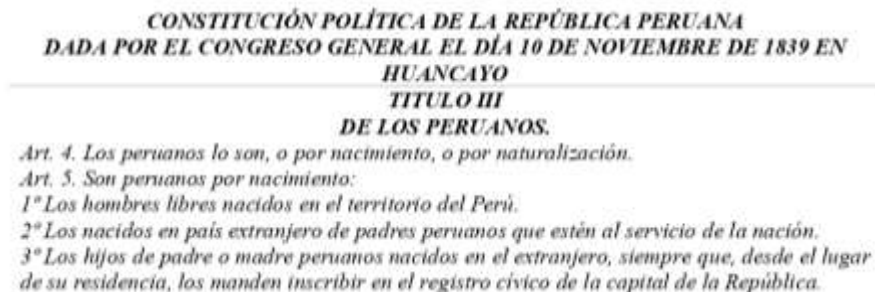
¹⁴ Decreto del 14/12/1838 (Sobre expedición de los pasaportes para extranjeros)

nacionalismo ya se empezaba a sentir de forma concreta y así lo hizo con la confederación, al respecto, el historiador Víctor Peralta, afirma lo siguiente:

“La sátira política de La Mulata contra Santa Cruz y la Confederación también fue un fiel reflejo del nacionalismo criollo limeño activado en un periodo de crisis como fue la contienda bélica del ejército restaurador chileno, apoyado por Gamarra, contra la Confederación Perú-boliviana en octubre de 1838... El nacionalismo criollo de Buenaventura Seoane expresó una peculiar forma de aproximarse a la noción de “pueblo soberano” por parte de los políticos conservadores que combatieron al proyecto de la Confederación Perú-boliviana. La asociación entre “pueblo” y “plebe” (la clase baja de origen africano) adquiere una connotación positiva cuando se trata de la defensa de la libertad de la patria por parte de estos últimos”. (Peralta Ruiz, 2017, p.180-181)

Convirtiéndose la confederación en un hito histórico que va a marcar la identidad de los criollos y el paso al sentimiento de nacionalidad; en ese contexto, lo referido a la ciudadanía y nacionalidad, tendrá otros matices respecto a las cartas constitucionales anteriores, destacándose incluso algunos casos que serán dirimidos por el Congreso.

En esta carta constitucional, se señalaba lo siguiente:



Art. 6. Son peruanos por naturalización:

1° Los extranjeros admitidos al servicio de la República, conforme al artículo 88, restricción 5° de esta Constitución.

2° Los extranjeros que hayan servido fielmente en el ejército o armada.

3° Los extranjeros avecindados en el territorio antes del año veinte, inscritos en el registro cívico.

4° Los extranjeros establecidos posteriormente que siendo profesores de alguna ciencia, arte o industria útil y teniendo cuatro años de residencia, se inscriban en el registro cívico o se casen con peruana.

5° Los Españoles desde que manifiesten su voluntad de domiciliarse en el país y se inscriban en el registro cívico.

6° Los que son ciudadanos por nacimiento en las demás Repúblicas hispano-americanas, inscribiéndose en el registro cívico.

TITULO IV

DE LA CIUDADANIA.

Art. 10. El derecho de la ciudadanía se pierde:

2° Por naturalización en otro Estado.

GARANTIAS INDIVIDUALES.

Art. 178. Los extranjeros gozarán de los derechos civiles, al igual de los peruanos, con tal que se sometan a las mismas cargas y pensiones que estos. () (*) Aclarado por decreto de 2 de junio de 1841. (Nota de Juan Oviedo).*

Se adoptan criterios que limitan la ciudadanía, una constitución conservadora que aumentó el límite de edad para elegir senadores y diputados. Toribio Pacheco, señala sobre esta constitución: “Una constitución con orígenes en las contradicciones internas, con actores que se creían omnipotentes, pero carentes de ideas claras y principios” (Pacheco, 2015, p. 86-89). Propia del conflicto de la convención nacional, la confederación que dividió al país y el triunfo de Gamarra que buscaba afianzar el poder del ejecutivo.

En cuanto a la ciudadanía, la figura del registro cívico toma mayor importancia a fin de ejercer ciudadanía en el caso de extranjeros; sin embargo, asumimos que la inscripción en el registro cívico, no era posible sin el otorgamiento de la carta de naturaleza por parte del congreso de la república tal como se desprende de una ley de diciembre de 1851 mediante la cual se otorgó la carta de ciudadanía a una persona natural de Bolivia; esto último se desprende del caso del Dr. Lucas Huerta Mercado, ocurrido en Arequipa y en el cual, mediante decreto del 4 de junio de 1845

se establece por parte del gobierno peruano que ningún extranjero puede obtener beneficios eclesiásticos sin contar previamente con la carta de naturaleza, por lo cual se declaró nula su admisión al concurso de la silla magistral del coro de Arequipa (Oviedo, 1861, p.331-332). Encontramos otros casos como es de los abogados extranjeros, los cuales no podían ejercer actos de jurisdicción y tampoco obtener cargos o empleos públicos que solo estaban reservados para peruanos de nacimiento de acuerdo a una ley de 08 de enero de 1848 y tampoco podían ejercer en calidad de conjuces en los juzgados y tribunales de la república de acuerdo a un decreto emitido el 06 de agosto de 1846 rubricado por Paz Soldán a través del Congreso de la República del Perú¹⁵. Otro caso relevantes lo encontramos en la ley del 24 de diciembre de 1851¹⁶, ley mediante la cual se le concedía carta de ciudadanía a don José Luis Terán, natural de Bolivia, dicha ley fue promulgada el 31 de diciembre de 1851; mediante la misma se establecía que el interesado debería solicitar la expedición de la carta de ciudadanía una vez haya realizado la inscripción en el registro cívico, siendo presidente del senado de ese entonces el señor Antonio de la Fuente y don Joaquín de Osma, presidente de la cámara de diputados. Siendo una vez más resaltante la importancia de la inscripción en el registro cívico sin lo cual no podía perfeccionarse la obtención de la ciudadanía por parte de los extranjeros.

Se consideraba peruanos también por naturalización a quienes hayan servido en el ejército o armada, a los que vivían residían antes del año de 1820 pero con la condición que estén inscritos en el registro cívico y a los profesores de alguna ciencia solo les exigía contar con cuatro años de residencia y estar inscritos en el “registro cívico” o estar casado con una peruana para adquirir la

¹⁵ Decreto del 06/08/1846 (Disponiendo que se nombre de conjuces a los abogados extranjeros)

¹⁶ Ley del 24/12/1851, promulgado el 31 de diciembre del 1851 (Concediendo carta de ciudadanía a Don José Luis Terán)

ciudadanía; respecto a la pérdida de ciudadanía, esta implicaba el hecho de naturalizarse en otro estado. Además, los extranjeros tenían los privilegios de contar con derechos civiles, condicionados a cumplir las mismas cargas, responsabilidades y pensiones que los peruanos.

En cuanto a leyes, se emitió la ley sobre ciudadanía, nacionalidad e inmigración extranjera, ley del año 1849, mediante la cual se asignaba una prima a los instructores de colonos extranjeros¹⁷, esta ley fue promulgada por el presidente Ramón Castilla y se justificaba en la necesidad de “falta de brazos” en la agricultura, por lo cual era inminente fomentar y premiar a los empresarios que introducían colonos en el Perú, siendo el primer favorecido Domingo Elías, uno de los fundadores del club de la unión y que promovió la inmigración masiva de Chinos Coolies al Perú. Al respecto, Villafuerte, ha señalado que “Junto a su socio Juan Rodríguez, tuvieron el “negocio”, además, al ser concesionario del guano, aprovechaba la mano de obra china, haciendo uso de las “contratas” y las condiciones infrahumanas en las que trabajaban los chinos coolies” (Villafuerte, 2012, p.132).

Debemos acotar que la migración china fue para cubrir los espacios dejados por indígenas que habían abandonado los campos; sin embargo, el trato era primitivo y eran traslados en forma degradante, perdiendo la vida muchos de ellos durante el traslado. La “Ley chinesca”, como se le denominó a la ley que promovía la migración de colonos, no garantizaba ningún derecho a los extranjeros, permitiendo el trato como mercaderías, en calidad de objetos del contrato. Los beneficiarios de esta ley serían los oligarcas de la patria que brindaron un trato inhumano y sin protección legal a los extranjeros. Más adelante, en virtud a la preocupación por la situación de los extranjeros, el presidente Castilla emitiría una nueva ley en 1861, mediante la cual se buscó

¹⁷ Ley del 17/11/1849 (Asignando una prima a los instructores de colonos extranjeros)

formalizar la inmigración que desencadenaría en un fenómeno masivo, teniendo que prohibirse en 1874 al no poder ser controlada.

Debemos anotar también un decreto de 1853, declarando ciudadanos por naturalización a ciudadanos americanos¹⁸, tomando como base legal el artículo 168 de la constitución de 1839, siendo beneficiados también pobladores escoceses y un chileno que marchaban hacia Loreto.

3.2.2. Estatuto Provisorio de 1855 y la constitución Política del Perú de 1856.

Estatuto provisorio de 1855 y la constitución política de 1856, representará la consolidación de diversas figuras de la corriente liberal, liderados por el intelectual José Gálvez. Ramón Castilla expidió el estatuto provisorio en el cual se consideraba de manera breve lo referente a la ciudadanía extranjera en el artículo 15, mediante el cual se les afirmaba sus derechos tanto de seguridad personal, como de sus propiedades o bienes, sin mayor descripción al respecto.

Por el contrario, la constitución de 1856 fue producto de elecciones sin limitaciones respecto a saber leer o escribir o la cantidad de bienes o contribución económica. Esta constitución se caracterizó por abolir los fueros, el fortalecer las instituciones, la libertad y la obediencia a la ley. En ese mismo sentido de coherencia, Gálvez se opuso de manera contundente a la amnistía de Echenique y tal como han descrito diversos investigadores, la corriente liberal, logró insertar de doctrina la revolución, teniendo como principal base a la comisión de Constitución.

¹⁸ Decreto del 25/07/1853 (Declarando ciudadanos por naturalización a varios ciudadanos americanos)

Los líderes liberales, añadirán además un liberalismo humanista, el sufragio universal, el fortalecimiento democrático de las instituciones y de la participación electoral, además de la impulsar la abolición por completo del tributo indígena y se opusieron tenazmente a la pena de muerte; una constitución adelantada a su tiempo que no logró consolidarse por la contradicción existente con la realidad peruana. En defensa a esta constitución, José Gálvez, sostendrá lo siguiente: “La constitución de 1856, ha sido producto de los mejores aportes de las constituciones anteriores” (Gálvez, 1999, p.640).

Los artículos señalados referentes a la ciudadanía y su obtención, figuran de la siguiente manera:

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA PERUANA DADA EL 13 DE OCTUBRE DE 1856 Y PROMULGADA EN 19 DEL MISMO MES</p> <p style="text-align: center;">TITULO V DE LOS PERUANOS</p> <p><i>Art. 32. Hay peruanos por nacimiento y por naturalización.</i></p> <p><i>Art. 33. Son peruanos por nacimiento:</i> <i>1° Los que nacen en el territorio de la República.</i> <i>2° Los hijos de padre o madre peruanos que nacen en el extranjero, cuyos nombres se inscriban en el registro cívico por voluntad de sus padres, mientras se hallan en la menor edad, o por la suya propia, desde que lleguen a la edad de veintiún años.</i></p> <p><i>Art. 34. Son peruanos por naturalización los extranjeros de veintiún años que ejerzan alguna profesión o industria y se inscriban en el registro cívico, en la forma que determine la ley.</i></p> <p><i>Art. 35. Todo peruano está obligado a servir a la República con su persona y bienes, del modo y en la proporción que señalen las leyes.</i></p> <p style="text-align: center;">TITULO VI DE LA CIUDADANIA</p> <p><i>Art. 36. Son ciudadanos o se hallan en ejercicio de los derechos políticos, los peruanos varones mayores de veintiún años, y los casados, aunque no hayan llegado a esta edad.</i></p> <p><i>Art. 37. El sufragio popular es directo: lo ejercen los ciudadanos que saben leer y escribir, o son jefes de taller, o tienen una propiedad raíz, o se han retirado, conforme a la ley, después de haber servido en el ejército o armada.</i></p> <p><i>Art. 38. Todos los ciudadanos pueden optar empleos públicos, siempre que reúnan las cualidades especiales que la ley exija para cada cargo.</i></p> <p><i>Art. 39. El ejercicio de la ciudadanía se suspende:</i> <i>1°.- Por incapacidad.</i> <i>2°.- Por tacha de deudor quebrado.</i> <i>3°.- Por hallarse procesado criminalmente y con mandamiento de prisión.</i> <i>4°.- Por ser notoriamente vago, jugador, ebrio o estar divorciado por culpa suya.</i></p> <p><i>Art. 40. El derecho de ciudadanía se pierde:</i> <i>3° Por obtener o ejercer la ciudadanía en otro Estado.</i> <i>4° Por recibir cualquier título de nobleza o condecoración monárquica.</i> <i>6° Por el tráfico de esclavos aún en el exterior.</i></p> <p style="text-align: center;">TITULO XIX DISPOSICIONES TRANSITORIAS.</p> <p><i>Art. 137. Los artículos 33 y 34 no privan de los derechos de peruano por nacimiento o por naturalización a los individuos que se hallen en posesión legal de esa calidad.</i></p> |
|--|

En cuanto a la adquisición de ciudadanía para las personas no nacionales, se estableció que eran peruanos en base a dos cuestiones: haber nacido en Perú o por nacionalización. En caso de haber nacido en territorio extranjero, pero, teniendo padre peruano o madre peruana, cualquiera de estos últimos, podrían inscribirlo en el “registro cívico”, pudiendo hacerlo también el mismo individuo, una vez haya cumplido los 21 años de edad. Adquirían la calidad de peruanos, los extranjeros que por nacionalización se inscriban en el “registro cívico”.

No se percibe una diferenciación entre extranjeros y nacionales para la obtención de la ciudadanía, se asumen que los peruanos en general, son ciudadanos cumpliendo veintiún años o estando casados sin llegar a la edad establecida de veintiún años.

3.2.3. Constitución Política del Perú de 1860.

La constitución de 1860, es una constitución que busca la conciliación y consenso en base a la realidad peruana, tomando en cuenta que liberales y conservadores buscaban imponer sus puntos de vista e ideas, conflicto que solo había causado ingobernabilidad. Castilla había tenido como aliados a los liberales que, una vez triunfado la revolución y defenestrado Echenique, no fueron tan afines a Castilla, esto se evidenciaría durante la Convención Nacional en la cual impregnaría el antimilitarismo, la abolición de los fueros y ser anticlerical, lo cual va a generar reticencias en la sociedad peruana.

Algunos estudios, confirman la característica conciliatoria de esta constitución, Por ejemplo, Ramos Núñez, ha señalado “que fue una constitución sumamente conciliadora, habiendo estado vigente durante mucho tiempo, siendo una de sus características más importantes las libertades” (Ramos, 2015, p. 71-73). Por su parte, Paz Soldán, afirma que: “tomando en cuenta el contexto, fue una constitución acorde a las circunstancias” (Paz Soldán & Belaunde, 1984, p. 168).

En cuanto a la constitución misma, de forma expresa señalaba respecto a la obtención de la ciudadanía, lo siguiente:

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
10 DE NOVIEMBRE DE 1860
EL LIBERTADOR RAMÓN CASTILLA,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA**

**TITULO V
DE LOS PERUANOS**

*Art. 33. Los peruanos lo son, por nacimiento o por naturalización.
(2) Este artículo ha sido sustituido con el siguiente:
Artículo único. - El artículo 38 de la Constitución queda reformado en los siguientes términos:
"Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos en ejercicio que saben leer y escribir". (Ley de 12 de noviembre de 1895).*

*Art. 34. Son peruanos por nacimiento:
1° Los que nacen en el territorio de la República.
2° Los hijos de padre peruano o de madre peruana, nacidos en el extranjero, y cuyos nombres se hayan inscrito en el registro cívico, por voluntad de sus padres, durante su minoría, o por la suya propia, luego que hubiesen llegado a la mayor edad o hubiesen sido emancipados.
3° Los naturales de la América Española y los españoles que se hallaban en el Perú cuando se proclamó y juró la independencia, y que han continuado residiendo en él posteriormente.*

*Art. 35. Son peruanos por naturalización:
Los extranjeros mayores de veintiún años residentes en el Perú, que ejercen algún oficio, industria o profesión y que se inscriben en el registro cívico en la forma determinada por la ley.*

Art. 36. Todo peruano está obligado a servir a la República con su persona y sus bienes, del modo y en la proporción que señalen las leyes.

**TITULO VI
DE LA CIUDADANIA**

*Art. 41. El derecho de ciudadanía se pierde:
3° Por obtener o ejercer la ciudadanía en otro Estado;
4° Por aceptar de un gobierno extranjero, cualquier empleo, título o condecoración, sin permiso del Congreso (3).
6° Por el tráfico de esclavos, cualquiera que sea el lugar donde se haga:*

**TITULO XIX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

Art. 135. Los artículos 34 y 35 no privan de los derechos de peruano por nacimiento o por naturalización, a los individuos que se hallen en posesión legal de esta calidad.

En términos concretos, la diferencia sustancial en cuanto a la adquisición de ciudadanía por parte de los extranjeros, no era sustancial; los cambios giraron en base a la parte orgánica de la constitución, pero no en cuanto a la parte dogmática.

Casos importantes durante los años posteriores a 1860, lo encontramos por ejemplo en una ley de inicios de 1866, mediante la cual se establecían los casos en que serán considerados peruanos por naturalización los extranjeros; considerando a los que prestaban servicios en cualquier buque de guerra peruano, chileno o de otra potencia aliada del Perú o Chile, brindándoles la naturalización con el solo hecho de aceptar sus servicios¹⁹. Posteriormente, el decreto del 10 de septiembre de 1866, dispuso que los extranjeros residentes en la República paguen su contribución personal en los mismos términos y forma que los peruanos; mediante este decreto, el presidente provisorio de la República Mariano Ignacio Prado, establecía que los extranjeros que estaban avecindados en el territorio de la república pagarían la contribución personal en los mismos casos, forma y proporción que los peruanos, encargando de la efectividad del mismo al despacho de hacienda y comercio²⁰.

Otro caso importante lo podemos encontrar en la ley del 09 de noviembre de 1888, mediante el cual los extranjeros domiciliarios en el Perú ya podían adquirir buques mercantes y enarbolar en ellos la bandera nacional al igual que los peruanos; la ley emitida por el presidente Cáceres

¹⁹ Ley del 24/01/1866 (Estableciendo los casos en que serán considerados peruanos por naturalización los extranjeros)

²⁰ Decreto 10/09/1866 (Disponiendo que los extranjeros residentes en la República paguen su contribución personal en los mismos términos y forma que los peruanos)

brindaba los mismos derechos que tenían los nacionales y derogaba todas las que se oponían a esta nueva disposición²¹.

Conclusiones

Realizando un análisis “histórico constitucional”, hemos podido comprobar los inicios de la adquisición y construcción de la ciudadanía por parte de los extranjeros en el siglo XIX, caracterizado por la configuración del concepto adoptado a partir de las revoluciones que marcaron Europa, en especial la francesa. La formación de los nuevos estados de América constituirá un fenómeno particular que iniciará el delineamiento de ciudadanía y posteriormente la nacionalidad. Sin embargo, este proceso a pesar de ser considerado en las diversas constituciones, fue incipiente aún y basado en términos administrativos que no garantizaban una efectividad de los derechos de las personas extranjeras.

El derecho de adquirir la ciudadanía, si fue considerado en las diversas cartas constitucionales, notando una mayor protección en aquellas constituciones expedidas en ámbitos de mínimo orden y siempre vinculadas a la protección de la ciudadanía; siendo en constituciones con antecedentes de mayor conflicto, la disminución de derechos ciudadanos en base a limitaciones, la mayor característica. En cuanto a los extranjeros y la adquisición de la ciudadanía, el derrotero en la construcción de la misma y la vinculación con nacionalidad, se vuelve mucho más notorio con la constitución de 1839, que, aunque podía ser mínimamente regresiva, dio inicio a la identidad

²¹ Ley del 09/11/1888 (Declarando que los extranjeros domiciliados en el Perú pueden adquirir buques mercantes y enarbolar en ellos la bandera nacional)

nacional, cuestión que a pesar del tiempo puede persistir al día de hoy, teniendo que repensar diversos conceptos y normativa sobre ciudadanía – nacionalidad acorde con el actual estado constitucional de derecho.

Dicho lo anterior, el constitucionalismo peruano del siglo XIX y muchos años atrás, reconocía ciudadanía basado en conceptos propios de la colonia y en obediencia a un monarca del cual se rogaba justicia condicionada a ser un buen vasallo, pasando luego por diversos requisitos como el hecho de pertenecer al catolicismo o la representación familiar que brindaba privilegios políticos. Con la independencia se va a iniciar una etapa de límites legales para ser considerado ciudadano, pero siempre en base a procedimientos como residencia, cartas de ciudadanía o naturaleza, edad o ser de padre peruano o peruana, entre otros. Características que a pesar del tiempo siguen figurando al día de hoy sin tomarse en cuenta las nuevas corrientes que propugnan variar esa concepción y asociación de ciudadano – nacionalidad, la misma que limita la eficacia de los derechos fundamentales de personas en situación de vulnerabilidad.

Recomendaciones

La ciudadanía tiene sus orígenes en Grecia con características principalmente vinculadas a la participación política y posteriormente en Roma, en donde se extiende la ciudadanía con motivaciones políticas y económicas. El posterior tratamiento brindado a la ciudadanía en la época moderna será marcado por las principales revoluciones como lo fueron la francesa y la americana, tratando de brindar una ciudadanía plena, la misma que en la práctica seguía siendo una ciudadanía limitada al excluir mujeres y extranjeros principalmente, lo cual debería mejorar el estudio en

cuanto a la misma, debido al tratamiento excluyente, aún tomando en cuenta las ideas de la ilustración. En América, diversos trabajos consultados, muestran la génesis de la ciudadanía y la forma de adquisición del término en base a las distintas independencias de la República, las ideas de quienes se habían formado en Europa y de quienes bebían de esa enseñanza en tierras americanas se constituye en piedra angular para considerar ciudadanos a quienes contaban con ciertos requisitos, uno de ellos, principalmente el vínculo con el estado recientemente independiente, por ello, los estudios que se plantean en materia de historia constitucional, deben abordar puntos cardinales poco abordados como la ciudadanía extranjera, el voto en los inicios de la república, desde una arista constitucional y tomando como principal característica el hecho de ser estados en formación.

Por lo general, se suele definir a la ciudadanía como el vínculo entre individuo y estado, por ello, tomando como referencia las distintas investigaciones, creemos conveniente que complementariamente se debe incluir no solo una perspectiva de reconocimiento de los derechos políticos, sino también de los derechos económicos, sociales y culturales, los mismos que no han sido reconocidos a lo largo de las distintas constituciones del siglo XIX, un desorden se vislumbra al revisar los artículos referentes a ciudadanía y no existen decretos o leyes que permitan colegir una visión de respeto de los derechos fundamentales de los extranjeros o migrantes; los hechos históricos son más lapidarios aún como la migración de chinos coolies, la más grande y a la vez la más degradante en cuanto al trato en su traslado y jornada laboral (contratas), contratos laborales que deben ser motivo de una amplia investigación a la luz del derecho laboral actual.

El debate contemporáneo respecto a la ciudadanía liberal y la ciudadanía social, abre las puertas a un debate más amplio aún en la cual se confirma el vínculo de la ciudadanía a los derechos humanos y el estado de derecho como lo decía Peces Barba, estado de derecho en el cual se deben garantizar y efectivizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin distinción de nacionalidad pero siempre con ciertos límites que no perjudiquen a los principales actores, en esa línea, es sumamente importante la participación política que permita decidir a los ciudadanos, respecto a las decisiones que afectan la vida diario del espacio en el cual realiza sus actividades personales, económicas, sociales y de otra índole, sin tener que ser obligado a formar parte de algo que no desea o tener que ir a un lugar del cual no se siente parte; ello, sin afectar el orden público y las buenas costumbres que todo ciudadano está en el deber de salvaguardar.

El estado liberal denota una cierta similitud entre ciudadanía y nacionalidad, idea que no soporta el análisis a partir de fenómenos como la migración y el multiculturalismo, dejando claro que la ciudadanía está vinculada a la obtención de derechos políticos y la nacionalidad en un sentido pasivo, un reconocimiento de pertenencia a una nación o estado. Siendo algunas conceptualizaciones actuales las que siguen generando esta similitud entre nacionalidad y ciudadanía, la misma que en términos concretos no es siquiera por asomo, cuestión similar, debiendo realizarse la distinción en términos conceptuales y lograr la ciudadanía plena en términos formales y aplicados a la práctica. La nacionalidad podría seguir configurando el procedimiento formal de adquisición como es hasta ahora, pero con la garantía de los derechos fundamentales sin necesidad de esperar la aceptación y por ende un criterio de subjetividad que por lo general suele vulnerar la igualdad por motivaciones raciales o económicas principalmente.

En cuanto al aspecto histórico, es importante la diferencia entre vecino y ciudadano, una cuestión histórica que no puede ser pasada por alto en la investigación de temas jurídicos, la contextualización resulta sumamente importante tal como lo describen diversos autores para lograr caracterizar los orígenes de las instituciones jurídicas plasmadas en nuestras primeras constituciones. En sus inicios, la ciudadanía confundida como vasallaje y el servilismo al absolutismo total, asociada también con el catolicismo para recibir favores o cargos públicos; adquiriendo nuevos matices a partir de las revoluciones francesa y americana, y, en Cádiz, otorgando aún una ciudadanía limitada pero que representó grandes avances al reconocimiento de derechos políticos, dejando de lado aún a los indígenas que desempeñarían un papel importante en la independencia de los nacientes estados americanos; referente a ellos, existen algunos trabajos de investigación como los de Manrique y Alberto Flores Galindo. En cuanto a la inmigración a lo largo del siglo investigado, la discriminación también ha sido un dato importante que puede brindar apertura nuevas investigaciones, sobre todo en algunas disposiciones que solo permitía tratar como ciudadanos a los migrantes de raza blanca, confirmándose la idea de la profesora Adela Cortina a la actualidad, en virtud de la cual no incomoda el migrante extranjero, incomoda que sea pobre y no tenga los recursos necesarios en sentido económico.

La constitución de Cádiz representa el inicio del constitucionalismo latinoamericano, sin ella, no podríamos abordar diversas instituciones que fueron tomadas de la revolución francesa y aplicadas posteriormente en territorio americano. La carta de naturaleza representa un hito en esta carta constitucional, la misma que establece los requisitos para su obtención y fija la edad en 25 años, una edad alta para la adquisición de la ciudadanía, el voto indirecto y la carta de ciudadanía pero habiendo obtenido en primer orden la carta de naturaleza, para lo cual era necesario contar con una

posición económica y social alta o casarse con un española bien posicionada, determinada entonces para personas que podrían acceder a dichos requisitos y aun así, limitada en cuanto a la función pública, de la cual estaban impedidos.

El estatuto provisional de San Martín, representa como tal el inicio del constitucionalismo peruano, como punto histórico que va a definir la forma de gobierno en cuanto a la discusión entre una monarquía constitucional y una república, triunfando esta última, siendo su mayor defensor Sánchez Carrión, al respecto debemos acotar, en disidencia con lo planteado por diferentes autores y académicos, que la monarquía constitucional puede haber sido la forma más efectiva de imponer orden y brindar una tránsito progresivo hacia la república en un país con tradición absolutista y acostumbrada a recibir órdenes sin chistar, basada en la desigualdad que al día de hoy sigue persistiendo. Un estatuto o documento que brindó la ciudadanía total en base a nacimiento y jurar la independencia, una patria que se encontraba en formación, demandaba otorgar ciudadanía plena y sin mayores requisitos, y así lo entendió San Martín, sin embargo, la exclusión indígena siguió un curso permanente. Los requisitos para obtener la ciudadanía, creían algunos autores como Pacheco, que era mejor fijarla mediante leyes y no mediante la constitución en virtud de la dificultad que implicaría una reforma. Los requisitos, eran bastante accesible para quienes llegaban al Perú y deseaban adquirir la ciudadanía, así por ejemplo se exigía 21 años y alguna profesión, todo ello se constituía en requisito indispensable para ser funcionario público, pero como mencionamos en líneas anteriores, la exclusión seguía latente en base a motivaciones raciales, económicas y sociales.

La constitución de 1823, con una representación discutida ya que incluso figuran algunos antecedentes de clientelismo electoral, teniendo una representación política solo de aquellos departamentos o territorios que estaban en manos los patriotas, tomando como representantes de algunos territorios a ciudadanos que se encontraban en la ciudad de Lima. Fijaron los requisitos para la obtención de la ciudadanía para una élite, como lo eran quienes tenía propiedad, algún arte o algún título nobiliario, contar con 25 años y en el caso de las personas extranjeras se debería acceder en primero a la carta de ciudadanía, brindando con alternativas la residencia amplia de 10 años para personas casadas y 15 para solteros, ello, en caso de no contar con la carta de ciudadanía, jurar la independencia y la propiedad u oficio exigidos, una ciudadanía basada en motivaciones económicas y sociales, totalmente discriminatoria y elitista. Al respecto, existen algunos archivos históricos que podrían brindar mayores luces sobre esta constitución y algunas otras instituciones, considerando que se constituyó en nuestra primera constitución oficial.

La constitución bolivariana, caracterizada por la mayoría de autores como antidemocrática y servil a los intereses de Simón Bolívar, reconocía la calidad de ciudadanos a quienes habían luchado por la independencia y tenían la denominación de libertadores al igual que él, sin embargo, no existía el procedimiento para la adquisición de la misma en el caso de quienes aspiraban a la ciudadanía peruana, solo mencionaba de manera somera la carta de naturaleza que era obtenida, una vez cumplido tres años de residencia y con esta carta, se podía acceder a la carta de ciudadanía; los requisitos como edad, profesión, ciencia o nivel de formación académica, eran preponderantes en la adquisición de la misma. Respecto a esta constitución, es importante mencionar que uno de los inspiradores y autor fue José María de Pando, peruano que había trabajado en la corte española y sirvió en los inicios de la república, jugando un papel de amplia importancia en la constitución de

1828, lo cual nos anima a una próxima investigación sobre sus aportes plasmados en esta carta constitucional.

La constitución de 1828 ha sido considerando por diversos autores como la mejor del siglo XIX, algunos la han denominado como la madre de todas ellas y otros ha resaltado sus diversas características positivas; respecto a la ciudadanía en el caso de los extranjeros, les otorgaba la misma siempre y cuando hayan prestado servicios en el ejército, los que se encuentran viviendo en el país con anterioridad a 1820, condicionado a poder probar ello y estar inscritos en el registro nacional. Se estableció la carta de naturaleza y la carta de ciudadanía mediante leyes complementarias en el 1829, una de ellas referida al procedimiento para la licencia de morada que es quizá una de las leyes más completas respecto al procedimiento establecido el otorgamiento de licencia de morada como una especie de carta de naturaleza previa, cumpliendo y reglamentando requisitos como vivienda y espacios de tiempo de permanencia en territorio peruano; las prefecturas han desempeñado un gran papel en esta época, al ser las encargadas del registro. El mismo año de 1829, una situación similar de regulación se hace con la carta de ciudadanía, la misma que mediante una ley, estableció los requisitos para el otorgamiento de la ciudadanía, tales como edad, residencia y el reconocimiento de la independencia del Perú, además de contar con propiedad o realizar alguna actividad – ciencia que represente un aporte para el país; las juntas departamentales tenían como función, emitir el informe favorable junto al ministerio del interior, el mismo que debería ser presentado por el extranjero ante el prefecto y debía jurar la obediencia al gobierno, inscribiéndose luego ante la municipalidad. Procedimiento que si bien es cierto, puede dar apariencia burocrática, sin duda, representa orden en cuanto a la constitución y a las leyes, una

constitución que dentro del ordenamiento legal, brindó protección aunque privilegiada pero con un sentido claro y forma en cuanto al otorgamiento de la ciudadanía.

Una ley de 1833, fijó las pruebas que deberían presentarse a fin de obtener la ciudadanía por parte de los extranjeros, una de ellas era la declaración de testigos, entre otros, siendo las juntas departamentales las encargadas de brindar el informe favorable o desfavorable. En cuanto a quiénes aspiraban a ser diputados, habiendo obtenido la ciudadanía, el requisito esencial era el económico, en ese sentido ha recibido críticas como ácidas que, en lugar de variar el criterio a partir de las constituciones anteriores, limita la participación política a requisitos económicos y sociales en los cuales, eran pocas personas las que podían acceder. En cuanto a esta constitución, la discusión es amplia y seguramente, muchos documentos aún por revisar, lo cual puede generar una amplia investigación sobre el derecho al voto y el ejercicio de la función pública o cargos de representación; quedando meridianamente claro que las constituciones y leyes, aunque con algunos avances, eran elitistas y dirigidos a favorecer intereses particulares.

La constitución de 1834, propia de la oscura decisión de revisar la constitución de 1828 en un periodo de cinco años, tiene como marca especial el enfrentamiento entre liberales y conservadores y una regresión en cuanto a los derechos fundamentales, una constitución producto de las contradicciones y que buscaba disminuir los poderes presidenciales al considerarlos peligrosos y propios de un autoritarismo imprudente. En cuanto a la ciudadanía, salvaguardó los derechos otorgados en la constitución de 1828; sin embargo, en pleno enfrentamiento por el poder, Salaverry, emitió un decreto en el cual podemos asumir que representa el más claro ejemplo de la ciudadanía cosmopolita, ya que permitía acceder a la ciudadanía peruana a cualquier persona que

pisara territorio peruano y deseara inscribirse en el registro cívico , excluyendo únicamente a los que no contaban con oficio alguno, y, otro decreto que prohibía el ingreso a extranjeros corrompidos que pudieran afectar la sociedad peruana con sus malas costumbres. Otro decreto, permitía a los familiares, acceder a los bienes del extranjero que haya fallecido en territorio peruano y además, también se regulaba los requisitos de acceso a la ciudadanía, aunque a diferencia de la constitución de 1828, eran requisitos un tanto más complicados. Una constitución que bien vale la pena poder analizar con mayor profundidad y volver sobre ella para estudiar diversas instituciones constitucionales.

La constitución de 1839, trató de la mano de Gamarra, regresar a la constitución de 1828, pero terminó siendo una constitución que buscó principalmente fortalecer la figura presidencial y afianzar el nacionalismo que se había apuntalado a partir de la confederación. En cuanto a la ciudadanía, es un tanto más conversador que su antecesora que fija las edades para acceder a cargo de senador y diputado bastante altas y con el fin de beneficiar a las personas cercanas al presidente Gamarra y con posibilidades económicas altas que puedan brindar una ancha base a su gobierno. Destaca el registro cívico y la inscripción en el mismo a fin de obtener la ciudadanía, no mencionando nada respecto a los requisitos, salvo el de haber servido al ejercito peruano o estar viviendo en el Perú, antes de 1820. En 1849 se dio la ley chinesca o “ley china”, la misma que otorgaba beneficios a quienes se encargaban de trasladar personas extranjeras al país, siendo el principal beneficiario Domingo Elías, quien luego sería parte del partido civil junto a Pardo, bien ameritan diversas investigaciones sobre este tema, pero desde un ámbito histórico constitucional para poder abordar las contratas firmadas por los inmigrantes que eran trasladados en condiciones extremadamente degradantes e inhumanas. El trato siempre fue diferenciado si es que trataba de

inmigrantes para brindar mano de obra en condiciones de esclavitud y en el caso de americanos, escoceses y chilenos de raza blanca, a quienes se les otorgaba la ciudadanía en base al artículo 168 de la constitución de 1839.

El estatuto provisorio de 1855 y la constitución de 1856, está constituido por diversos aportes, el principal es de unos de sus actores como Gálvez, en cuanto a la abolición de fueros y el afianzamiento de la institucionalidad, sin embargo, debido a sus características liberales, confrontó con el tiempo histórico, teniendo que ser dejada de lado para dar paso a una nueva constitución que sería la de 1860. Los requisitos principales por los cuales se obtenía la ciudadanía eran en base al nacimiento en territorio peruano o por nacionalización, en el caso del primer requisito, se podía obtener en base a contar con uno de los padres peruano, un dato importante es de la inscripción en el registro cívico. No se encuentran leyes sobre este periodo y se entiende que se mantenían las leyes y decretos anteriores mediante los cuales se había intensificado la inmigración de personas de China para cubrir el trabajo en los campos agrícolas. Un periodo en el cual si bien es cierto, las ideas liberales alcanzaron su mayor éxito, bien sería un estudio pormenorizado de las diferentes causas que llevaron a la implosión de esta carta constitucional y con ella a sus autores.

La constitución de 1860, también llamada “la constitución conciliadora”, no incorporó nuevos elementos a la obtención de la ciudadanía que se había convertido y convivido con normas incluso de 30 años atrás, degradándose más aún con el decreto que permitió beneficios para quienes lograban traer personas extranjeras a fin de que puedan hacer cargo del trabajo en los campos agrícolas y posteriormente, intentando la formalización de la misma; dedicada esta constitución a organizar el poder con el fin de brindar orden y estabilidad al gobierno. La parte dogmática de la

constitución poco a nada importó en esta constitución, dedicada con mayor tino a la cuestión orgánica y su fortalecimiento y la división del poder. Tal es así que bien podría sugerirse un trabajo de investigación futuro en el cual se investigue sus principales aportes y factores para constituirse en la constitución con mayor tiempo de duración en el largo periodo histórico inestable de nuestras constituciones.

BIBLIOGRAFIA

- Águila Peralta, A. D. (2013). *La ciudadanía corporativa: Política, constituciones y sufragio en el Perú (1821-1896)* (No. 324 (85) 324.9850633). Recuperado de: <http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=UCC.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=133958>
- Aláez Corral, B. (2005). *Nacionalidad y ciudadanía: una aproximación histórico-funcional. Historia Constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional*, 6. Recuperado de: <http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/28244/1/Nacionalidad%20y%20ciudadania.pdf>
- Arroyo, C. L. (2012). *El rol de la Constitución de Cádiz en la gestación de la independencia del Perú. Historia Constitucional*, (13), 315-337. Recuperado de <http://www.cervantesvirtual.com/research/el-rol-de-la-constitucion-de-cadiz-en-la-gestacion-de-la-independencia-del-peru--the-role-of-constitution-of-cadiz-in-the-gestation-of-the-independence-of-peru/1ba25dcb-1dd1-471b-9237-59ad177132a1.pdf>
- Chiaramonti, G. (2005). *Ciudadanía y Representación en el Perú (1808-1860): los itinerarios de la soberanía. Fondo Editorial UNMSM. Recuperado de: <http://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/580>*
- De Losada, C. A., & López, S. (Eds.). (2018). *Historia de las elecciones en el Perú: estudios sobre el gobierno representativo* (Vol. 41). Instituto de Estudios peruanos.
- De Losada, C. A. (2008). " Ciudadano" y" vecino" en Iberoamérica, 1750-1850: monarquía o república. *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas= Anuario de Historia de América Latina* (JbLA), (45), 31-55. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3137838>

De Losada, C. (2005). *Votos y bayonetas: Perú 1825-1851*. Recuperado de:
<http://www.onpe.gob.pe/modEscaparte/downloads/L-0030.pdf#page=166>

De Losada, C. A., Junior, J. F., Sebastián, J. F., Melo, M. D. F. S. E., Goldman, N., Curiel, C. L., ... & Zermeno, G. (2009). *Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850* (p. 1422). Fundación Carolina; Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales de España; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. <https://rodrigomorenog.files.wordpress.com/2015/08/diccionario-politico-y-social-del-mundo-iberoamericano-1750-1850.pdf>

Diderot, D., d'Alembert, J. L. R., & Lough, J. (1970). *La enciclopedia: selección*. Guadarrama.

Flores, A. (1997). *República sin ciudadanos*. *Fronteras de la Historia*, 1, 13-33. Recuperado de
<https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/article/view/731>

Gálvez, J. F. (1999). *La Convención nacional y la Constitución de 1856*. *Pensamiento Constitucional*, 6(6), 641-687. Recuperado de:
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/viewFile/3231/3059>

García Belaunde, D. (1997). *Los inicios del constitucionalismo peruano (1821-1842)*. *Pensamiento Constitucional*, 4(4), 233-244. Recuperado de:
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3304/3146>

Belaunde, V. A. (1933). *El debate constitucional: Discursos en la Asamblea, 1931-1932*. Lima.

García Belaúnde, D. (2016). *Las constituciones del Perú*. Lima: Jurado Nacional de Elecciones, Fondo Editorial, 2016.

- Gordon, S. (2001). *Ciudadanía y derechos sociales:¿ criterios distributivos?*. Clacso.
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101029063559/4arminana.pdf>
- Gutiérrez Escudero, A. (1991). *Los intentos colonizadores de Francia y Holanda en el siglo XVI*.
<https://digital.csic.es/bitstream/10261/49771/1/Binder1.pdf>
- Hampe, T. (2009). *Las Cortes de Cádiz y su irradiación constitucional en el Perú*. *Historia constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional*, (10), 507-509.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5732772.pdf>
- Jamanca Vega, M. A. (2003). *Repertorio bibliográfico de historia constitucional del Perú*.
Recuperado de: <http://www.cervantesvirtual.com/research/repertorio-bibliografico-de-historia-constitucional-del-peru/9ea3531e-e66c-478c-91b3-96b74a24ffa7.pdf>
- Jellinek, G. (1964). *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, reimp. de la ed. de 1919. Scientia, Aalenpp.
- Jiyagón-Villanueva, J. C. (2018). *La reforma constitucional de 1860: la necesidad de reformar la Constitución liberal de 1856*. En *Líneas Generales*, (001), 33-41. Recuperado de:
<http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enlineasgenerales/article/download/1828/1858>
- Klusmeyer, D. B. (1996). *Between Consent and Descent Conceptions of Democratic Citizenship*.
- Landa, C. (2018). *Fundamentos jurídicos de la constitución de Cádiz de 1812: el caso del debido proceso*. Fondo editorial del Congreso de la República del Perú.
- Linera, M. Á. P. (2003). *El derecho de voto*. Tecnos.
- Manrique, N. (1991). *La historiografía peruana sobre el siglo XIX*. *Revista Andina*, 9(1), 245.
Recuperado de: <http://www.revistaandinacbc.com/wp-content/uploads/2016/ra17/ra-17-1991-08.pdf>

Marshall, T. H., Bottomore, T. B., & Linares, P. (1998). *Ciudadanía y clase social*. Madrid: Alianza.

http://www.academia.edu/download/47354051/marshall_pdf_para_imprimir_y_fotocopiar.pdf

Martín, E. P., & Vicente, J. M. E. (2001). *Los extranjeros y el derecho en la antigua Grecia*. Universidad Rey Juan Carlos.

Martínez, T. H. (2012). *Sobre la Constitución de 1812: las Cortes gaditanas y su impacto en el Perú*. *Trocadero*, (24), 27-36. Recuperado de: <https://revistas.uca.es/pre/index.php/trocadero/article/view/1955>

Medina Ortega, M. (2001). *Ciudadanía europea y representación popular*. http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/177693/ciudadania_medina_2001.pdf?sequence=1

Miravet, P. (2006). "Algunos problemas para la participación cívica y política de los inmigrantes". *Cuadernos electrónicos de Filosofía del Derecho*, n° 14. Recuperado de: <https://www.uv.es/cefd/14/pmiravet.pdf>

Miralles, J. A. H. (2009). *Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos*. *Factótum*, 6(2009), 1-22. Recuperado de: http://www.academia.edu/download/45298241/Factotum_6_1_JA_Horrach.pdf

Morón Urbina, J. C. (2000). *Bolívar y su propuesta constitucional de 1826*. *Derecho PUCP*, 53, 173. Recuperado de: https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/derecho53§ion=9

Nicolás Shumway, *La invención de la Argentina. Historia de una idea*, Emecé editores, Argentina, 2002, pp. 30-37.

- Núñez, F. (2007). *El concepto de vecino/ciudadano en Perú (1750-1850)*. *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, 9(17), 235-253.
<https://www.redalyc.org/pdf/282/28291719.pdf>
- O'Donnell, G. (1993). *Estado, democratización y ciudadanía*. *Nueva sociedad*, 128, 62-87.
https://nuso.org/media/articles/downloads/2290_1.pdf
- O'Phelan, S. (1979). *La rebelión de Túpac Amaru: Organización interna, dirigencia y alianzas*. *Histórica*, 3(2), 89-121. Recuperado de:
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/viewFile/7859/8132>
- Oviedo, J. (1861). *Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde el año de 1821 hasta 31 de diciembre de 1859: reimpresión por orden de materias (Vol. 2)*. F. Bailly. Recuperado de:
[https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=dRLge8rlW8wC&oi=fnd&pg=PA24&dq=Oviedo,+J.+\(1861\).+Colecci%C3%B3n+de+leyes,+decretos+y+%C3%B3rdenes+publicadas+en+el+Per%C3%BA+desde+el+a%C3%B1o+de+1821+hasta+31+de+diciembre+de+1859:+reimpresi%C3%B3n+por+orden+de+materias+\(Vol.+2\).+F.+Bailly&ots=p69zvKDFRA&sig=_SiUoeVaR48ZtE7R3VqOfCx_Ud0](https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=dRLge8rlW8wC&oi=fnd&pg=PA24&dq=Oviedo,+J.+(1861).+Colecci%C3%B3n+de+leyes,+decretos+y+%C3%B3rdenes+publicadas+en+el+Per%C3%BA+desde+el+a%C3%B1o+de+1821+hasta+31+de+diciembre+de+1859:+reimpresi%C3%B3n+por+orden+de+materias+(Vol.+2).+F.+Bailly&ots=p69zvKDFRA&sig=_SiUoeVaR48ZtE7R3VqOfCx_Ud0)
- Pacheco, J. T. (2015). *Cuestiones constitucionales*. Lima: Tribunal Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales: Servicios Gráficos JMD, [2015].
- Paniagua Corazao, V. (2004). *La Convención Nacional de 1833-1834 y la Constitución de 1834*. *Pensamiento Constitucional*, 10(10), 341-432. Recuperado de:
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/viewFile/7674/7920>
- Paniagua, V. (2003). *Los orígenes del gobierno representativo en el Perú: las elecciones (1809-1826)*. Fondo Editorial PUCP.

- Paniagua Corazao, V. (2007). *El proceso constituyente y la Constitución vitalicia (bolivariana) de 1826 (I)*. Recuperado de: <http://www.cervantesvirtual.com/research/el-proceso-constituyente-y-la-constitucion-vitalicia-bolivariana-de-1826-i/ab6e04d0-1a30-4757-8b35-7997b6abbad0.pdf>
- Pareja Paz-Soldán, J. P., & Belaunde, D. G. (1984). *Derecho constitucional peruano y la Constitución de 1979*. Ediciones Justo Valenzuela.
- Pareja Paz Soldán, J. (1963). “Evolución constitucional del Perú en el siglo XX”, en *Visión del Perú en el siglo XX*, Tomo II, Lima: Ediciones Librería Studium, 1963, pp. 3-40.
- Peces-Barba Martínez, G. (2003). *Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales*. https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/10004/transito_Peces_2003.pdf?sequence=1
- Peralta Ruiz, V. (2017). *Una sátira política contra la Confederación Perú-Boliviana: La Mulata (1838) de Buenaventura Seoane*. *Revista del Instituto Riva-Agüero: RIRA*, 2(1), 161-185.
- Pérez Luño, A. E. (2002). *Ciudadanía y definiciones*. Doxa. <http://www.cervantesvirtual.com/research/ciudadana-y-definiciones-0/007a5d80-82b2-11df-acc7-002185ce6064.pdf>
- Pérez Luño, A.E. (2003): *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid; 8ª ed.
- Quimper, J. M. (2016). *Derecho político general*. Lima: Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, 2016.
- Rawls, J. (1996). *Liberalismo político (1993)*. México, FCE .

- Ramos Núñez, C. A. (2018). *La letra de la ley: historia de las constituciones del Perú*. Lima: Tribunal Constitucional del Perú. Centro de Estudios Constitucionales, 2018.
- Rosanvallon, P., & LE SACRE, D. C. (1992). *Histoire du suffrage universel en France*. GALLIMARD, BIBLIOTHÈQUE DES HISTOIRES.
- Rozas, J. C. F., González, S. Á., & Campos, J. D. G. (1987). *Derecho español de la nacionalidad*. Tecnos, DL.
- Ruiz, V. P. (2017). *Una sátira política contra la Confederación Perú-Boliviana: La Mulata (1838) de Buenaventura Seoane*. *Revista del Instituto Riva-Agüero: RIRA*, 2(1), 161-185. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6135754>
- Ruiz, V. P. (2008). *El impacto de las Cortes de Cádiz en el Perú. Un balance historiográfico*. *Revista de Indias*, 68(242), 67-96. Recuperado de: <http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/635>
- Salinas, E. M. (2016). *Un acercamiento al estudio de las inmigraciones extranjeras en el Perú durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX*. *Tierra nuestra*, 8(1), 65-96. Recuperado de: <http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/tnu/article/view/100>
- Shumway, N. (1993). *La invención de la argentina [1991]*. Buenos Aires: Emecé Editores.
- Villafuerte, G. P. (2012). *Aspectos generales de la inmigración y la demografía china en el Perú (1849-1903)*. *Historia 2.0: Conocimiento Histórico en Clave Digital*, 2(4), 126-140. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4095496>
- Walzer, M. (2001). *El concepto de ciudadanía en una sociedad que cambia. Guerra, política y moral*.

Zanatti, M. M. (2005). *Irurozqui Victoriano, Marta (ed.). La mirada esquiva: reflexiones históricas de la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005, 385 pp. histórica, 29(2), 195-199. Recuperado de: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/download/1332/1286>*

Zapata-Barrero, R. (2001). *Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo contrato social. Anthropos Editorial.*

ANEXOS

Decreto 17-10-1821

Declarando que los extranjeros residentes en el país tienen los mismos derechos y obligaciones que los peruanos

Para obviar en lo sucesivo las cuestiones que podrían suscitarse entre los comandantes de los buques de guerra de las naciones neutrales y el gobierno del país, sobre los derechos que gozan en él los extranjeros residentes y las obligaciones á que se sujetan durante su permanencia, he resuelto decretar lo siguiente :

Art. 1. Los extranjeros residentes en el país tienen los mismos derechos que los ciudadanos de él á la proteccion del Gobierno y de las leyes, ante las cuales no hay aceptacion de personas.

Art. 2. Los extranjeros quedan reciprocamente obligados y sujetos á las leyes del país, y á las órdenes del Gobierno, sin tener derecho á reclamar la intervencion de los comandantes de los buques de guerra ó cónsules de las naciones á que pertenezcan, á no ser en el único caso que por la ley de las naciones puedan hacerlo, cual es el de una abierta infraccion de sus derechos.

Art. 3. Los extranjeros residentes en el país están obligados á tomar las armas para sostener el orden interior, pero no para hacer la guerra á los Españoles, mientras conserven el carácter de neutrales.

Art. 4. Los extranjeros están obligados á sufrir las cargas y contribuciones de los demas habitantes del Estado en

proporcion á sus fortunas, y á los beneficios que reciban del libre ejercicio de su industria.

Publiquese por bando y comuníquese á quienes corresponde.

Dado en el palacio protectoral de Lima, á 17 de Octubre de 1821. — 2.º

SAN MARTIN.

Por orden de S. E. — B. MONTEAGUDO

Decreto del 19/04/1822 - A

Sobre naturalización y ciudadanía de los extranjeros

MINISTERIO DE ESTADO

Desde que el ejército libertador llegó á Pisco, todas las providencias que se han expedido, han llevado el sello de la franqueza y liberalidad, tanto hácia los ciudadanos del Perú, como hácia todos los extranjeros, á quienes se han dispensado exenciones y miramientos, que anuncian los progresos de la ciencia económica, única base de la prosperidad de los Estados. Esta no consiste sino en el aumento de producción, y entre los medios que á ella contribuyen, el primero y mas importante es la adquisición de hombres útiles, que con el capital de sus luces, de su industria ó de sus riquezas, multiplican los valores que circulan en el gran mercado de la sociedad. Los Españoles que no tenían otra idea de la riqueza, que la que tiene el que habita en el fondo del Africa, la graduaban solo por las cantidades de oro y plata que exportaban de sus establecimientos ultramarinos, y prohibían con la mayor severidad á los extranjeros la comunicacion con estos países. Este plan tan mezquino como antisocial, no solo era efecto de su ignorancia, sino del deseo exclusivo que animaba al Gobierno y sus súbditos de devorar las producciones de América, aunque tuviesen que sacrificar para conseguirlo la felicidad de medio mundo y su propio interes, porque sin duda, habrían sacado dobles ventajas con una administracion mas racional.

A mas de estas consideraciones que son aplicables á todos los Estados, hay otras peculiares al nuestro, que hacen mas necesaria la liberalidad con los extranjeros. Un territorio inmenso enteramente despoblado en la mayor parte, que sobre abunda de ricas y varias producciones, y ofrece un vasto campo á especulaciones de todo género, á empresas científicas y comerciales, y en fin á proyectos tan nuevos como lo es el mismo país, sin embargo de la antigüedad de su descubrimiento; exige que el Gobierno á quien toca animar la producción para aumentar la riqueza nacional, invite á los honrados é industrijsos ex-

tranjeros, á que vengan á disfrutar las delicias de un suelo, que algun día será indudablemente lo que hoy es el Asia, respecto de la Europa, y esta comparada con el resto del mundo. Todo hombre que posee un talento, es un valor que siempre debe encontrar demanda en los pueblos que marchan á su engrandecimiento; así como en aquellos en que retrograda la civilización, ó en que es estacionaria la ignorancia, es un crimen el saber mas que los otros, y la seguridad del sabio exige ponerse á nivel con los estúpidos.

EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decreto:

Art. 1. Todo extranjero que llegue al Perú y acredite, que posee alguna ciencia ó arte que desea ejercitar, exponiendo que su ánimo es avecinarse en el país, será exceptuado del decreto de 4 de Marzo anterior, y recibirá gratuitamente las cartas de ciudadanía, previo el juramento de sostener la independencia del país y cumplir las leyes establecidas.

Art. 2. Los extranjeros que con igual intencion viniesen á entablar casas de comercio, y poner en giro sus capitales, quedan comprendidos en el artículo anterior.

Art. 3. Todo extranjero que introducir el uso de alguna máquina ó metodo que favorezca ó mejore la agricultura y sus productos, la explotación de las minas y los labores de la industria en todo ramo, siempre que antes no haya sido conocido este método, y que acredite sumariamente sus ventajas el que lo proponga, será exceptuado de toda contribucion por un año, á mas de las exenciones que prescribe el artículo primero.

Art. 4. Los extranjeros que hagan constar que poseen algun arte ó ciencia, y que carecen de fondos para ejercitarla, serán auxiliados por el Estado con cargo de reintegro, previos los informes convenientes.

Art. 5. Los que quieran dedicarse á la agricultura y carezcan de capital, siem-

pre que acrediten que esta es su profesión, serán también auxiliados en los mismos términos, y á mas se les asignará por el Gobierno, de las tierras valdías, una suerte proporcionada á las circunstancias del empresario.

Art. 6. A mas de las gracias anteriores gozarán los extranjeros comprendidos en este decreto, de la protección del Gobierno, á cuyo fin queda especialmente encargado el ministro de Estado de amparar sus intereses, siempre que á mas de ser útiles al país, cumplan con las leyes establecidas en él, como los demás ciudadanos del Perú.

Dado en el palacio del Supremo Gobierno, en Lima, á 19 de Abril de 1822. — 3.^o

Firmado. — TORRE-TAGLE. — Por orden de
S. E. — B. MONTEAGUDO

Decreto del 26/03/1822

Sobre derechos de naturalización, de los ciudadanos de la América Española

EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decreto ;

1. Los naturales ó naturalizados de los Estados independientes de la América llamada ántes Española, y los que sean ciudadanos de ellos, solo gozarán de los derechos que les concede en su respectivo caso el decreto protectoral de 4 de Octubre del año anterior, siempre que á los naturales y ciudadanos del Perú se les franqueen los mismos derechos en aquellos Estados.

2. Continuarán en el goce de aquellos derechos los naturales y ciudadanos del Imperio Mejicano, por el término de seis meses ; los de Colombia y provincias del Rio de la Plata por el de cuatro ; los de Chile por el de tres ; y los de Guayaquil por dos, en cuyo tiempo podrán recibirse las contestaciones oficiales de aquellos Gobiernos sobre este particular. El ministro de Relaciones Exteriores queda encargado de dirigir las notas correspondientes con copia de este decreto que se insertará en la *Gaceta*.

Dado en el palacio del Supremo Gobierno, en Lima, á 26 de Marzo de 1822. — 3.º

Firmado : — TORRE-TAGLE.

Por orden de S. E. — B. MONTEAGUDO

Ley del 30/07/1829

Disponiendo que los extranjeros soliciten licencia de morada

El ciudadano Antonio Gutierrez de La-Fuente, general de division, y Jefe Supremo provisorio de la República, etc.

Considerando :

Que el trascurso del tiempo y los reglamentos publicados despues de espedido el decreto de 4 de Marzo de 1822, sobre las condiciones que han de exigirse á los extranjeros que quieran residir en el Perú, requieren conformarlo al espíritu de aquellos, haciendo en él las modificaciones indispensables para salvar las dudas y dificultades que embarazan su cumplimiento;

Decreto :

Art. 1. Todos los extranjeros existentes en esta capital presentarán dentro de seis días, al prefecto del departamento, una declaracion escrita de su habitacion, nombre, destino y patria, acompañada de un pliego del sello primero, para que les extienda la licencia de morada que nunca se concederá por mas de seis meses, vencidos los cuales se refrendará por otros seis, y sucesivamente hasta que tengan dos años de residencia en el pais, segun se previene en el citado decreto.

Art. 2. Todos los extranjeros procedentes del exterior que lleguen á puertos del estado distantes de la residencia del prefecto, presentarán su pasaporte á la autoridad local ante quien delararán el tiempo que se proponen residir en el pais; y, si excediese de un mes, solicitarán, por su conducto y con las mismas formalidades, la licencia indicada que se les concederá en los mismos términos y con las mismas calidades.

Art. 3. Los comandantes de puerto pasarán directamente razon á la prefectura, á cuyas órdenes se hallen, de los extranjeros que entren ó salgan por el de su cargo, para que esta solicite á los que no se presenten, y les imponga por su desobediencia una pena pecuniaria que no exceda de cincuenta pesos, ó ocho dias de detencion á los que rehusaren pagarlos.

Art. 4. Los que falsifiquen licencias demorada; induzcan á falsificarlas ó las usen falsas, pagarán una multa de quinientos pesos aplicables á usos de policia, ó sufrirán una prision de dos meses.

Art. 5. La accion contra los contraventores de las disposiciones anteriores durará un año despues de la fecha del delito.

Art. 6. No se comprenden en esta resolucion los cónsules, los ministros públicos debidamente autorizados, los individuos de la comitiva de estos, ni los extranjeros que justifiquen tener cinco años de residencia segun la ley.

Art. 7. Las prefecturas llevarán un registro de todos los extranjeros existentes en el territorio de su jurisdiccion de los que ingresen ó salgan, y de los que obtuvieren permiso demorado : y darán cuenta de todo mensualmente á este Ministerio.

Art. 8. Los dueños de casas particulares, hospederias ó fondas avisarán en el término de veinticuatro horas al inspector del barrio la llegada de cualquier persona recien venida del exterior, y este al gobernador de su distrito para que lo comunique á la prefectura.

Art. 9. Los prefectos de los departamentos quedan obligados bajo la mas estricta responsabilidad á la ejecucion de este decreto quince dias despues de su recibo.

Art. 10. El ministro de Estado en el departamento de Gobierno y relaciones exteriores velará su cumplimiento, y lo mandará imprimir, publicar y circular.

Dado en la casa del Gobierno, en Lima, á 30 de Julio de 1829. — 10.º

ANTONIO G. DE LA-FUENTE.

Por orden de S. E. — M. ALVAREZ.

D. 30 de Julio de 1829.
Disponiendo que los extranjeros soliciten licencia de morada.

Ley del 30/09/1829 - Promulgada el 02 de octubre de 1829

Señalando los casos en que los extranjeros obtendrán el derecho y carta de ciudadanía

El ciudadano Antonio Gutierrez de La-Fuente, vice-presidente de la República y encargado del Poder Ejecutivo.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente :

EL CONGRESO

DE LA REPUBLICA PERUANA.

L. 30 de Setiembre de 1829.
Sobre cartas de ciudadanía.

Considerando :

Que por el artículo 4, párrafo 5.º de la Constitución, se franquea la carta de ciudadanía á los extranjeros establecidos en la República despues del año de 1820, y que se estableciesen en adelante, si tuviesen las calidades prevenidas por la ley;

Ha dado la siguiente :

Art. 1. El extranjero obtendrá el derecho y carta de ciudadanía :

1.º Si despues de haber cumplido 21 años de edad, declarase ante el prefecto del departamento en que ha de domiciliarse, su intencion de permanecer en el Perú, y residiese siete años. No se comprenden en esta disposicion los Españoles que ingresaren sucesivamente, mientras su nacion no reconoce la independencia del Perú.

2.º Si se casa con Peruana.

3.º Si adquiere en propiedad algun bien inmueble, que le produzca una renta de mil pesos anuales.

4.º Si introduce en el país algun talento, invencion, industria, ciencia ó arte útil, y las enseña á dos Peruanos.

Art. 2. La demanda de ciudadanía, con los documentos en que se apoya, se presentará al prefecto del departamento en que esté domiciliado el recurrente, para que la dirija con su informe al ministro del Interior, quien la presentará al Congreso.

Art. 3. El Poder Legislativo concederá esta gracia con previo informe de la junta del departamento en que reside el pretendiente y del ministro del Interior.

Art. 4. Se expedirá por el gobierno al agraciado la carta respectiva, sellada

con el gran sello de la República.

Art. 5. Por esta carta se concede al extranjero el goce de los derechos civiles y politicos, que no sean privativos de los ciudadanos de nacimiento, segun la Constitución.

Art. 6. El agraciado presentará esta carta al prefecto del departamento ó al sub-prefecto de la provincia en que reside, y prestará en su presencia el juramento constitucional y de obediencia al gobierno. De este acto se pondrá la constancia respectiva al pié de dicha carta.

Art. 7. Presentará despues esta carta ante la municipalidad de su domicilio, para que se tome de ella razon en el libro respectivo, y el agraciado sea inscrito en el registro civil.

Art. 8. El Congreso podrá conceder á un extranjero la gracia de ciudadanía por consideraciones que fijan su residencia en el Perú, y prestar el juramento constitucional y de obediencia al gobierno.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario á su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular.

Lima, Setiembre 30 de 1829.

ANDRÉS REYES, senador presidente. — JUAN ANTONIO TABARA, presidente de la Cámara de Diputados. — JOSÉ FAYEN, senador secretario. — M. UNQUIZO, diputado secretario suplente.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule, y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la casa del Gobierno en Lima á 2 de Octubre de 1829. — 10.º

ANTONIO GUTIERREZ DE LA-FUENTE.

Por orden de S. E.

MARIANO ALVAREZ

Ley del 22 de diciembre 1832 - Promulgada el 14/01/1833

Señalando las pruebas que deban presentar los extranjeros residentes en la República antes del año de 1820, para obtener la ciudadanía

El ciudadano Agustín Gamarra, gran mariscal, Presidente de la República, etc.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente :

EL CONGRESO

DE LA REPUBLICA PERUANA.

L. 22 de Diciembre de 1832.
Declarando las pruebas que han de producir los extranjeros avarciados en la República ántes de 1820 para obtener la ciudadanía.

Atendiendo á que por el artículo 4.º § 4.º de la Constitución, los extranjeros avarciados en la República desde ántes de 1820 para obtener la ciudadanía han de probar, conforme á la ley, haber vivido en ella pacíficamente.

Ha dado la ley siguiente :

Art. 1. Se tendrán por pruebas bastantes.

1.º Los informes de las autoridades y Municipalidades en donde hayan residido durante la guerra de la independencia.

2.º Las informaciones de siete testigos de notoria probidad y servicios á la causa de la independencia, recibidas por la autoridad judicial del lugar, ó lugares en donde hayan residido, con citacion del ministerio fiscal ó sindico procurador.

3.º Los documentos que acrediten haber hecho espontáneamente servicios útiles al Estado en la causa de su independencia.

Art. 2. Las juntas podrán mandar se reciban nuevas informaciones públicas.

Art. 3. Nombrarán una comision especial para que abra dictámen sobre esta clase de demandas.

Art. 4. Las juntas calificarán la conducta del pretendiente, segun el mérito de lo actuado, y darán cuenta al Congreso con el expediente é informe por conducto del ministerio del Interior.

Art. 5. El Congreso en vista de la calificacion; ordenará la inscripcion del interesado en el registro nacional.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario á su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular.

Lima, Diciembre 22 de 1832.

MANUEL TELLERIA, presidente del Senado. — JOSÉ MARÍA DE PANDO, presidente de la Cámara de Diputados. — JOSÉ GREGORIO DE LA MATA, Senador secretario. — JOSÉ GOYCOCHEA, Diputado secretario.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la casa del Gobierno, en Lima, á 14 de Enero de 1833. — 14.º

A. GAMARRA.

Por órden de S. E. — JOSÉ MARÍA DE PANDO

Decreto del 22/05/1828 - A

Estableciendo plazo, para el aislamiento de los ciudadanos en los cuerpos cívicos

El ciudadano José de La-Mar, Presidente
de la República Peruana, etc.

Considerando :

I. Que la defensa y seguridad interior de la República están consignadas por su Constitución política en los cuerpos cívicos ;

II. Que todo ciudadano está obligado á sostener las garantías nacionales por medios al mismo tiempo poderosos que pacíficos ;

III. Que las tropas de línea no son suficientes á cubrir la guarnicion de esta plaza ;

Decreto :

Art. 1. Todo hombre libre y naturalizado ó avecindado conforme á la ley en esta capital, desde la edad de 15 á 50 años, se alistará en los cuerpos cívicos en el perentorio término de ocho dias de la publicacion de este decreto.

Art. 2. Los que ya lo estuviesen y se hallaren ocultos, se presentarán á sus gefes inmediatos, quienes no los reconvendrán, ni ménos molestarán por la falta que han cometido.

Art. 3. Los que concluido le término prefijado en el art. 1 no se hubiesen alistado, ó presentado, serán destinados al ejército ó marina.

Art. 4. Los facultativos que expidieren certificados á individuos que no estén legítimamente impedidos por sus enfermedades para darse de baja ó retirarse enteramente del servicio, sufrirán por primera vez la multa de 50 pesos, aplicables á los gastos de los cuerpos cívicos, y por la segunda serán suspensos de ejercer su profesion.

Art. 5. Todo el que bajo cualquier pretexto ocultare algun individuo para

D. 22 de Mayo
de 1828.

Señalando el
plazo de ocho
dias para el alis-
tamiento de los
ciudadanos en los
cuerpos cívicos.

Decreto del 22/05/1828 - B

Estableciendo plazo, para el aislamiento de los ciudadanos en los cuerpos cívicos

el alistamiento queda sujeto á la pena que prescribe en estos casos la ordenanza del ejército.

Art. 6. El Prefecto del departamento redoblará su celo y vigilancia en que solo se empleen para inspectores y celadores de barrio los vecinos que sean mayores de 50 años, y pasará oportunamente al Ministerio de Guerra una relacion de los que se removieren y nombraren.

Art. 7. Los inspectores y celadores de barrio cuidarán especialmente de entender la publicacion de este decreto entre los vecinos de sus jurisdicciones respectivas, á cuyo efecto se les remitirán por la Prefectura los ejemplares correspondientes.

Art. 8. Son exceptuados del presente decreto los transeuntes, siendo del cargo del Prefecto hacer la anotacion respectiva en sus pasaportes.

Art. 9. Los extranjeros transeuntes serán escludidos del alistamiento por una certificacion ó documento de su Ministro plenipotenciario, ó Cónsul que los califique.

Art. 10. Cada cívico obtendrá un boleto con el sello del Estado Mayor firmado por el capitan de su compañía, *constame* del sargento mayor y V.º B.º del comandante del cuerpo, quedando sin valor ni efecto los anteriormente dados.

Art. 11. Los individuos que en virtud de este decreto deben alistarse lo verificarán en el orden siguiente: los que pertenezcan á la *legion de comercio* en la casa de su comandante. Los de la milicia cívica antigua en la prevencion de la Casa de Gobierno. Los de la *Union* en San Pedro Nolasco, y los de *Huampani* en el cuartel de la Buenamuerte.

Art. 12. Los preceptores prevendrán á sus alumnos, que tengan la edad que prescribe el art. 1, que presenten sus boletos al coronel comandante D. Luis

Morales, en la prevencion de la Casa de Gobierno, para que los vise; y ninguno se considerará exceptuado sin este requisito.

Art. 13. Los esclavos tendrán de la Prefectura un boleto que los califique de tales, y el que careciere de este documento será aprehendido para entrar en las filas del ejército, ó al servicio de la marina, por las partidas que destacarán por la ciudad y sus suburbios todos los cuerpos cívicos de la guarnicion, concluido que sea el término señalado en el art. 1.

Art. 14. Los inspectores de barrio darán á los comandantes de estas partidas el auxilio que les pidan para el mejor desempeño de su comision.

Art. 15. El Ministro de Estado en el departamento de la Guerra queda encargado de la ejecucion de este decreto.

Imprimase, publíquese y circúlese.

Casa del Gobierno, en Lima, á 22 de Mayo de 1828.
— 9.º y 7.º

JOSÉ DE LA-MAR.

Por orden de S. E. — JUAN SALAZAR.

Decreto del 19/02/1829 - A

Disponiendo que los ciudadanos desde la edad de 15 hasta 50 años sean alistados en cuerpos
cívicos

El ciudadano Manuel de Salazar y Baquijano, Vice-
Presidente de la República.

D. 19 de Febrero
de 1829.
Disponiendo que
todos los ciu-
danos sean alista-
dos en cuerpos
cívicos.

Considerando :

I. Que la defensa y seguridad interior de la República están consignadas á los cuerpos cívicos ;

II. Que todo ciudadano está obligado á sostener las garantías nacionales ;

III. Que las tropas de línea, en razon á las circunstancias, tienen que consagrarse á la defensa exterior de la República ;

IV. Que no es razonable que las fatigas del servicio rolen entre un corto número de ciudadanos cuando todos están obligados á soportarlas ;

Decreto :

Art. 1. Todo hombre libre y naturalizado, ó avecindado conforme á la ley en esta capital, desde la edad de 15 hasta 50 años, se alistará en cuerpos, cívicos en el perentorio término de quince dias de la publicacion de este decreto.

Art. 2. Los que ya estuviesen alistados y se hallen ocultos se presentarán á sus gefes inmediatos sin que les sirva de nota la falta que han cometido.

Art. 3. Los que concluido el término prefijado en el art. 1 no se hubiesen enrolado serán destinados al servicio de la guarnicion del Callao, por el término de seis meses, ó pagarán este servicio, quedando siempre alistados en los cuerpos que les correspondan segun su clase.

Art. 4. Todo el que bajo cualquier pretexto ocultare algun individuo para el alistamiento sufrirá una multa desde veinticinco á cien pesos, segun sus proporciones, la que se aplicará á los fondos del cuerpo á que corresponda el ocultado.

Art. 5. Quedan sin efecto todos los boletos de excepcion de alistamiento expedidos ántes de la publicacion de este decreto, y solo serán valederos los que se revaliden por el gefe que se designa en el artículo siguiente, quedando en su vigor las licencias concedidas por autoridad legitima.

Art. 6. Se nombra al coronel D. Antonio Placencia para que en una junta compuesta de los comandantes de los cuatro cuerpos cívicos de esta capital, el Sub-inspector de hospitales y los cirujanos mayores doctores D. Laureano Lara y D. Francisco Fuentes, reconozca los individuos que pretendan ser exceptuados por sus enfermedades. Al efecto se reunirán en el cuartel de la Independencia en los dias lunes, miércoles y viernes de los quince dias prefijados, desde las diez de la mañana á las dos de la tarde.

Art. 7. Si del reconocimiento resul-

Decreto del 19/02/1829 - B

Disponiendo que los ciudadanos desde la edad de 15 hasta 50 años sean alistados en cuerpos cívicos

tase algun individuo inútil para las armas se le expedirá por el expresado coronel el boleto respectivo con el sello del Estado Mayor General, y al respaldo certificarán los facultativos la inutilidad.

Art. 8. Quedan exceptuados del alistamiento general todos los funcionarios públicos y meritorios de las oficinas por decreto supremo, los abogados, escribanos, procuradores, médicos, cirujanos, bolicarios, maestros de primeras letras, catedráticos y sus sustitutos en ejercicio, los alumnos de los colegios y escuelas y los sirvientes necesarios para los conventos y parroquias.

Art. 9. Tampoco comprende el alistamiento á los transeúntes, siendo de cargo del Prefecto del departamento hacer la anotacion respectiva en sus pasaportes.

Art. 10. Los extranjeros transeúntes serán exceptuados del alistamiento mediante una certificacion del Ministro ó Cónsul de su nacion, visada por el comandante del batallon Comercio.

Art. 11. El Prefecto del departamento cuidará de que solo se empleen para inspectores, celadores de barrio y recaudadores de contribuciones, á vecinos que segun este decreto no les comprenda el alistamiento, relevando á los que actualmente estén, y deban enrolarse en los cuerpos cívicos.

Art. 12. Los asistentes de gefes y oficiales del ejército y armada serán exceptuados por un boleto que tendrán de su oficial con V.º B.º del gefe principal de su armada.

Art. 13. Los individuos que en virtud de este decreto deben alistarse la verificarán en el orden siguiente: los que pertenezcan al batallon de milicia cívica en la casa de su comandante: los de la Union en el cuartel de San Pedro Nolasco: los de la *Legion de Comercio* en la prevencion de la Casa de Gobierno;

y los de *Huampani* en el cuartel de la Buenamuerte.

Art. 14. Cada civico obtendrá un boleto con el sello del Estado Mayor General firmado por el capitán de su compañía, constame del sargento mayor, V.º B.º del comandante del cuerpo y la rúbrica del coronel encargado, quedando anulados los que actualmente tienen.

Art. 15. El director de beneficencia, los encargados de talleres y oficinas públicas ó comisiones que dependen del Estado, pasarán á la posible brevedad al Ministerio de la Guerra una relacion nominal de los individuos que estrictamente necesiten y empleen en sus labores, para que conforme á ella se manden librar los boletos de excepcion.

Art. 16. Los rectores de los colegios y preceptores de escuelas remitirán al coronel encargado listas nominales de los alumnos que tengan la edad prefijada en el art. 1 á fin de que les expida los correspondientes boletos. Para los de la escuela central de marina, como de un establecimiento militar, bastará solo el boleto del director de ella.

Art. 17. Los esclavos tendrán de la Prefectura un boleto que los califique de tales, y los que fueren aprehendidos sin él serán detenidos en los cuarteles hasta que sus amos califiquen legalmente su propiedad.

Art. 18. Concluido el término prefijado saldrán partidas de los cuerpos cívicos á levar, á quienes darán los inspectores de barrio el auxilio que les pidan para el desempeño de su comision.

Art. 19. El Ministro de Estado del despacho de Guerra y Marina queda encargado de la ejecucion de este decreto.

Imprimase, publíquese y circúlese á quienes corresponda.

Dado en la Casa del Gobierno, en Lima, á 19 de Febrero de 1829. — 40.º y 8.º

MANUEL SALAZAR.

Por orden de S. E. — R. JIMENA.

Decreto del 14/03/1835

Declarando ciudadanos del Perú, a todos los extranjeros que quieran inscribirse en el registro
cívico

El ciudadano Felipe Santiago de Salaverry, Jefe Supremo del Perú, etc.

D. 14 de Marzo de
1835.

Declarando ciudadanos del
Perú á todos los
extranjeros que
quieran inscribirse en el
registro cívico.

Considerando :

I. Que las instituciones de los pueblos deben seguir la marcha que les señala la filosofía.

II. Que uno de los beneficios que produce el aumento de las luces, es estrechar á los hombres separados por las preocupaciones.

III. Que todo lo que contribuye á anudar los lazos sociales y multiplicar las relaciones entre los pueblos, aumenta sus goces y su prosperidad mutua.

IV. Que la ciudadanía no debe considerarse como derecho anexo al nacimiento, sino como una prerogativa que las leyes conceden al hombre honrado é industrioso, pues que la misma ley que llama al extranjero en ciertos casos y con determinadas condiciones á su goce, expele al natural á quien su conducta relajada hace indigno de este título.

V. Que el atraso de las artes en el Perú, efecto necesario de su infancia política, hace precisa y útil, á mas de justa, la proteccion que el Gobierno se ha propuesto conceder á todo hombre industrioso, cuyo trabajo sirva de eficaz estímulo.

VI. Que el ejemplo de los Estados Unidos del Norte, es la respuesta mas vigorosa que puede darse á los que animados de un nacionalismo indiscreto, hacen consistir la ventura de la patria en su aislamiento, y el patriotismo en el odio al extranjero; y la prosperidad de aquel pueblo, un ejemplo digno de imitacion.

VII. Que es altamente glorioso á un Gobierno seguir las lecciones de la sabiduría y aprovechar los preceptos de la experiencia, preparando así al país que rige una época de engrandecimiento.

Decreto :

Art. 1. Todo individuo de cualquier punto del globo, es ciudadano del Perú desde el momento que pisando su territorio, quiera inscribirse en el registro cívico.

Art. 2. Solamente se excluye á los que no profesen industria alguna:

Mi secretaria general queda encargada del cumplimiento de este decreto.

Dado en la casa del Gobierno, en Lima, á 14 de Marzo de 1835. — 16.

FELIPE SANTIAGO DE SALAVERRY.

Por orden de S. E. — El secretario general. — J. D. ESPINAR

Decreto del 29/03/1832

Prohibiendo el ingreso al Perú de extranjeros viciosos y corrompidos

El Excmo. Sr. Presidente de la República se ha servido dictar con fecha 29 del presente el decreto siguiente.

Correspondiendo á la suprema inspeccion que ejerce el Gobierno en todos los ramos de alta policia, el velar que no se introduzcan en el territorio, extranjeros que corrompan con sus vicios la poblacion, y se entreguen por falta de recursos y de industria á todo género de excesos : las autoridades litorales y de la frontera del departamento de la Libertad, no permitirán ingresos en sus respectivos distritos, á ninguna persona procedente del Estado del Ecuador, sin el correspondiente pasaporte, á menos que sea comprendida en los casos en que el derecho de gentes obliga á las naciones á conceder asilo á los transfugos, entre los cuales no deben numerarse los desertores, que abandonando sus banderas vengan á vivir en el ocio, á alarmar la seguridad individual, y á ser finalmente el origen de reclamos y contestaciones que debiliten la armonia que subsiste entre los dos Estados.

Comuniquese.

Una rúbrica de S. E. — VIDAURRE.

D. 29 de Marzo de
1832.
Prohibiendo que
entren al Perú
extranjeros vicio-
sos y corrom-
pidos.

Decreto del 08/06/1832 - A

Aprobando el voto del Consejo de Estado sobre bienes testamentarios de los extranjeros

REPUBLICA PERUANA

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ESTADO.

Lima, á 4.º de Junio de 1832.

D. 8 de Junio de 1832.
Aprobando el voto
del Consejo de
Estado sobre bie-
nes testamenta-
rios de los ex-
tranjeros.

Señor Ministro. — En sesion de la fecha se ha acordado por el Consejo de Estado, que sobre la consulta del Ejecutivo referente al asunto de que trata la nota del Señor Encargado de Negocios de los Estados Unidos, que se sirvió U. S. dirigirme en 1.º de Mayo último, se tenga por voto suyo lo que sigue :

« Con motivo de haber fallecido en Arequipa intestado un ciudadano de los Estados Unidos de la América del Norte, se ha suscitado la competencia entre el consul de estos, residente en esa ciudad, y el juez de 1.ª instancia, apoyado por la prefectura, sobre el conocimiento del juicio respectivo, y destino de los bienes del difunto. El consul solicitó se le entregasen para remitirlos á los herederos del finado, alegando lo resuelto por este supremo gobierno en caso igual acaecido en el Cuzco con los bienes de otro ciudadano de los mismos Estados, que fueron entregados al consul residente en esta capital. El juez de 1.ª instancia y el prefecto se han resistido á darle intervencion al consul y á la entrega de los bienes, fundándose en lo dispuesto por las LL. españolas que aseguran estar aun vigentes, y principalmente por la cédula de 6 de Julio de 1776, en virtud de las que, dicen, deben las autoridades territoriales entender exclusivamente en el juicio respectivo, y los bienes pertenecer al fisco. El consul se ha dirigido al Señor Ministro de su país cerca de este gobierno, acompañándole en copia la correspondencia entablada sobre el particular, y este solicita de S. E. el presidente la órden respectiva á la autoridad de Arequipa, á fin de que se entreguen los bienes citados al consul. El Ejecutivo queriendo oír el voto

del Consejo sobre este asunto, lo ha remitido con los antecedentes, y este lo verifica en el modo siguiente.

« En el tiempo en que los extranjeros eran considerados como enemigos, tuvo origen el derecho de extranjeria, conocido comunmente con el nombre de *Aubain*, por el que el fisco sucedia en los bienes de los que fallecian en su territorio. Despues que la civilizacion é ilustracion fueron haciendo conocer á los gobiernos las inapreciables ventajas que reportarian los Estados del mutuo comercio y relaciones, fué insensiblemente desapareciendo este tan bárbaro derecho, como igualmente otros no menos injustos. Si se echa una ojeada sobre la legislacion española, se verá que por las LL. del fuero real, que hoy son la 2.ª y 5.ª del título 30, libro 1.º de la Novísima Recopilacion, los romeros y peregrinos extranjeros podian disponer libremente de sus bienes por testamento, y si fallecian intestados, sus propiedades no eran confiscadas. Les fué concedido este privilegio respecto de los demas, en obsequio á la devocion y piedad, segun lo expresa la ley 1.ª del mismo título y libro, pues dice : « Que gozar deben de « mayor privilegio aquellos que trabajo « toman por servicio de Dios. » Posteriormente por tratados especiales de la España con la Inglaterra, la Cerdeña y la Francia, se estipuló la libertad de los súbditos de estos reinos para disponer de sus bienes por testamento, y la entrega á sus herederos de los pertenecientes á los que fallecian intestados. »

« Esta conducta del gobierno español respecto de la Península, no fué extensiva á la América. Su política con ella se dirigia á mantenerla siempre en la ignorancia de sus derechos, para que permaneciese sometida y jamas pudiese sacudir el yugo. Por esta razon consideraba de su interes prohibir absolutamente la entrada en estos países á los extranjeros,

Decreto del 08/06/1832 - B

Aprobando el voto del Consejo de Estado sobre bienes testamentarios de los extranjeros

y hacia todo lo conveniente para que estos se retrajesen de penetrar en nuestro territorio. Este fué el espíritu de todas las leyes de Indias dictadas sobre el particular, y el de la cédula de 24 de Abril de 1807 que prevenia no se admitiesen en los puertos de las Indias cónsules, agentes, ni representantes de las naciones extranjeras por muy grandes que fuesen los motivos. Por consiguiente, por ese código no solo no podian los extranjeros disponer de sus bienes por testamento, sino que tambien el fisco sucedia en los de los que morian ab intestato. Este era el modo de asegurar la ejecucion de las leyes prohibitivas de su entrada en América, pues ninguno queria exponerse á esos riesgos. La cédula de 6 de Julio de 1776 moderó en alguna manera el rigor de las anteriores disposiciones, ordenando no fuesen secuestrados los bienes de los extranjeros casados con Española ó India, y dejando hijos habidos en ellas. Mas todas estas resoluciones ni rigen, ni pueden regirnos en el día. Ellas fueron dictadas con el fin de mantener á la América atada siempre á la metrópoli; fueron dadas para regir las colonias; y así luego que estas se hicieron independientes, quedaron por este mismo hecho libres de leyes que directamente se oponian á su independencia y libertad. El Perú por la carta puede celebrar tratados de amistad y alianza con otros Estados: admite los enviados diplomáticos de todas las naciones: sus puertos no están cerrados á ninguna, y franquea la ciudadanía á los extranjeros que tengan los requisitos legales. Por consiguiente el estado actual del Perú es diametralmente opuesto al antiguo; y no pueden considerarse subsistentes unas leyes unicamente dictadas para sostenerlo, y cuyo imperio vino á tierra juntamente con el poder sobre estos países del gobierno que las sancionó. »

« Ultimamente, seria la mayor injusticia ó inconsecuencia de nuestras instituciones, admitir á los extranjeros y convidarlos á domiciliarse en nuestro suelo para despojar á sus herederos del fruto de la industria y trabajo de sus padres y deudos. El hombre no por trasladarse á otro país deja de ser miembro de la sociedad á que pertenece por su nacimiento, mientras que por un acto

positivo de los que la ley señala, no se hace ciudadano de otro Estado. Tampoco puede dejársele de suponer la voluntad presunta, natural á todo hombre, de que por su fallecimiento recaigan sus bienes en sus herederos legítimos. Por tanto, la justicia exige que muriendo intestado, sus bienes se entreguen al agente de su país, para que los remita á los que deban heredarlos. Mas esto no impide que en obsequio al interes que pueda tener un tercero en dichos bienes, ya por ser un acreedor del difunto, ó por otro motivo cualquiera se adopte la medida conveniente para que un ciudadano del lugar del fallecimiento, ó de otro Estado, no sea perjudicado, teniendo que dirigirse á un país lejano á usar de su derecho. A este fin se expidió sabiamente por el Gobierno Español en 1724 la resolución respectiva, que hoy es la ley 4.ª, título 11, libro 3.ª de la Novísima, detallando el modo de proceder las justicias ordinarias en los ab intestatos de los extranjeros. Esta ley no se ha derogado, ni en nada es opuesta á nuestras instituciones, siendo por el contrario muy conforme á la justicia, al derecho de los Peruanos y á la jurisdiccion de sus tribunales. Por tanto á ella deberán arreglarse los jueces del Perú en los casos que ocurrieren. »

« En vista de todo lo expuesto, el Consejo absuelve su voto diciendo, que el Ejecutivo puede ordenar la entrega de los bienes del ciudadano de los Estados Unidos que ha fallecido en Arequipa, al cónsul de estos, residente allí, despues de practicadas las diligencias en el modo y forma que previene la ley 4.ª últimamente citada. »

Lo transcribo á U. S. en cumplimiento de lo acordado, devolviéndole el expediente de la materia, y suscribiéndome su atento, obsecuente servidor.

JOSE FREYRE, Consejero secretario.

Señor Ministro de Estado en el departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores.

Lima, 8 de Junio de 1832.

Conformado con el voto consultivo del Consejo de Estado, transcribese al Prefecto de Arequipa para su cumplimiento, é imprimase para que sirva de regla en los casos que ocurran.

Una rúbrica de S. E. — Por orden de S. E. — PANDO.

Ley del 14/01/1833

Señalando las pruebas que deban presentar los extranjeros residentes en la República antes del año de 1820, para obtener la ciudadanía

El ciudadano Agustín Gamarra, gran mariscal, Presidente de la República, etc.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente :

EL CONGRESO

DE LA REPUBLICA PERUANA.

L. 22 de Diciembre de 1832.
Declarando las pruebas que han de producir los extranjeros avarciados en la República antes de 1820 para obtener la ciudadanía.

Atendiendo á que por el artículo 4.º de la Constitución, los extranjeros avarciados en la República desde ántes de 1820 para obtener la ciudadanía han de probar, conforme á la ley, haber vivido en ella pacíficamente.

Ha dado la ley siguiente :

Art. 1. Se tendrán por pruebas bastantes.

1.º Los informes de las autoridades y Municipalidades en donde hayan residido durante la guerra de la independencia.

2.º Las informaciones de siete testigos de notoria probidad y servicios á la causa de la independencia, recibidas por la autoridad judicial del lugar, ó lugares en donde hayan residido, con citacion del ministerio fiscal ó síndico procurador.

3.º Los documentos que acrediten haber hecho espontáneamente servicios útiles al Estado en la causa de su independencia.

Art. 2. Las juntas podrán mandar se reciban nuevas informaciones públicas.

Art. 3. Nombrarán una comision especial para que abra dictámen sobre esta clase de demandas.

Art. 4. Las juntas calificarán la conducta del pretendiente, segun el mérito de lo actuado, y darán cuenta al Congreso con el expediente é informe por conducto del ministerio del Interior.

Art. 5. El Congreso en vista de la calificacion; ordenará la inscripcion del interesado en el registro nacional.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario á su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular.

Lima, Diciembre 22 de 1832.

MANUEL TELLERIA, presidente del Senado. — JOSÉ MARÍA DE PANDO, presidente de la Cámara de Diputados. — JOSÉ GREGORIO DE LA MATA, Senador secretario. — JOSÉ GOYCOCHEA, Diputado secretario.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la casa del Gobierno, en Lima, á 14 de Enero de 1833. — 14.º

A. GAMARRA.

Por orden de S. E. — JOSÉ MARÍA DE PANDO

Decreto del 06/09/1833

Prohibiendo a los extranjeros, la pesca de cetáceos y anfibios en las playas e islas del Perú

El ciudadano José Braulio del Campo-Redondo, vicepresidente del Senado, encargado del Poder Ejecutivo de la República, etc.

Considerando :

I. Que la pesca en las costas é islas de la República debe hacerse exclusivamente por ciudadanos del Perú ;

II. Que en la actualidad se está practicando por algunos buques extranjeros, invadiendo la propiedad, y privando por la fuerza á los naturales del país que se emplean en ella ;

Decreto :

Art. 1. Queda prohibida absolutamente á los extranjeros, la pesca de cetáceos y anfibios en las playas é islas del Perú.

Art. 2. Los capitanes de buques extranjeros que contraviniesen á esta disposicion, serán tenidos por contrabandistas.

Art. 3. Los capitanes de puerto darán permiso á los ciudadanos del Perú para este ejercicio, con conocimiento de la autoridad superior del departamento, comandancia general de Marina, y jefes de aduanas de la costa.

Art. 4. Cualquier buque nacional que se encuentre en las inmediaciones de las costas é islas sin los documentos legales que acrediten el permiso, podrá ser detenido como sospechoso en cualquier puerto de la República, sin que tenga derecho á reclamar por ello daños y perjuicios.

El oficial mayor encargado del despacho del Ministerio de Estado en el departamento de Hacienda cuidará del cumplimiento de este decreto, y de que se imprima y publique.

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, á 6 de Setiembre de 1833. — 14.º

JOSÉ BRAULIO DEL CAMPO-REDONDO.
Por orden de S. E. — JOSÉ DE MENDIBURU

Decreto del 14/12/1838

Sobre expedición de los pasaportes para extranjeros

El ciudadano José de la Riva-Agüero, gran mariscal,
Presidente provisorio de la República Nor-Peruana, etc.

Considerando .

I. Que para mantener y estrechar las relaciones de armonía y buena inteligencia con las Naciones amigas, es preciso tomar las precauciones oportunas de policía, á fin de que no se altere en ellas el orden público ;

D. 14 de Diciembre de 1838.
Sobre expedición de los pasaportes para extranjeros.

II. Que los Gobiernos de los países bien organizados siguiendo esta política saludable, no conceden pasaportes á los extranjeros, sin el consentimiento de los Representantes de sus respectivas Naciones ;

Decreto :

Art. 1. Los pasaportes que se expidan á los extranjeros para el interior ó exterior, deberán ser visados y sellados por los ministros diplomáticos, cónsules, ó vice-cónsules de los Estados á que pertenezcan los individuos que los soliciten.

Art. 2. En ningun puerto se permitirá el embarco de las personas, cuyos pasaportes deban tener y carezcan del requisito mencionado.

Art. 3. Los intendentes de policía y las demas autoridades locales cuidarán bajo la mas estrecha responsabilidad del cumplimiento de esta disposicion.

El secretario general queda encargado de la ejecucion de este decreto, y de mandarlo imprimir , publicar y circular.

Dado en el palacio del Supremo Gobierno, en Lima,
á 14 de Diciembre de 1838.

JOSÉ DE LA RIVA-AGÜERO.

Por orden de S. E. — LORENZO BAZO

Decreto del 06/08/1846

disponiendo que se nombre de conjuces a los abogados extranjeros

Lima, á 6 de Agosto de 1846.

D. 6 de Agosto
do 1846.
Disponiendo que
no se nombre de
conjuces á los
abogados extran-
jeros.

Considerando que es atribucion del Ejecutivo dar decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la Constitucion y de las leyes; que en uso de esta atribucion constitucional, resolvió en 17 de Marzo último, que los abogados extranjeros no pueden ser llamados de conjuces á los juzgados y tribunales de la República : llévase adelante la citada disposicion, conforme con el acuerdo del Consejo de Estado, y publíquese.

Rúbrica de S. E. — PAZ SOLDAN.

Ley del 24/12/1851 - promulgada el 31 de diciembre de 1851

concediendo carta de ciudadanía a Don José Luis Terán

Lima, Diciembre 24 de 1851.

L. 24 de Diciem-
bre de 1851.
Concediendo car-
ta de ciudadanía
á don José
Luis Terán.

Excmo. señor. — El Congreso ha con-
cedido carta de ciudadanía á D. José
Luis Terán, natural de Bolivia, y dis-
pone que V. E. se la mande expedir,
luego que el interesado se inscriba en el
registro civil.

Lo comunicamos á V. E. para su in-
teligencia y fines consiguientes.

Dios guarde á V. E.

ANTONIO G. DE LA FUENTE, presidente del
Senado. — JOAQUIN J. DE OSMA, presidente
de la Cámara de Diputados. — BUENAVENTURA
SEOANE, Senador secretario. — JOSÉ
ENRIQUE GAMBOA, Diputado secretario.

Excmo. señor Presidente de la República.

Lima, Diciembre 31 de 1851.

Cumplase, comuníquese y publíquese.

Rúbrica de S. E. — HERRERA.

Ley del 17/11/1849

Asignando una prima a los instructores de colonos extranjeros

El ciudadano Ramon Castilla, Presidente
de la República, etc.

Por cuanto el Congreso nacional ha
dado la ley siguiente :

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA.

Considerando :

I. Que en el grado de postracion que se halla la agricultura del país, por la falta de brazos, es de necesidad remover este mal, protegiendo la inmigracion extranjera ;

II. Que la Representacion Nacional debe fomentar este nuevo género de industria premiando á los empresarios y con especialidad á los primeros introductores de colonos en atencion á los mayores riesgos á que se hallan expuestos ;

Ha dado la ley siguiente :

Art. 1. Todo introductor de colonos extranjeros de cualquier sexo, cuyo número no baje de cincuenta, y cuyas edades sean de diez á cuarenta años, disfrutará una prima de treinta pesos por individuo que pagará el Tesoro Nacional al momento de la internacion, teniendo á la vista las contratas respectivas autorizadas por los Cónsules de la República.

Art. 2. Se concede á los primeros introductores de colonos, D. Domingo Elías y D. Juan Rodriguez, privilegio exclusivo por el término de cuatro años, con la misma prima de treinta pesos señalada en esta ley, por cada colono de la China que introduzcan en los departamentos de Lima y la Libertad, conforme al artículo anterior, comprendiéndose en esta gracia los Chinos que de cuenta de los interesados llegaron al puerto del Callao en el buque *Federico Guillermo*.

Art. 3. El pago de la prima se hará por el Tesoro Nacional, con los derechos

que aducden las mercaderias internadas en los buques conductores de colonos, y si tales derechos no alcanzasen á cubrir la prima, se completará lo que falta con los pagarés que, por el mismo ramo, otorguen los interesados á favor del Estado, previo el descuento que señala el Reglamento de Comercio en ambos casos.

Art. 4. Los colonos extranjeros que fueren introducidos al país quedarán exentos de contribuciones y de todo servicio militar, por el término de diez años desde el día de su internacion.

Art. 5. El Gobierno, por medio de las autoridades de su dependencia, vigilará sobre el puntual cumplimiento de las contratas celebradas entre los colonos y sus patrones.

Art. 6. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que pueda tomar lo necesario de los productos del huano, á fin de cubrir las primas que deban darse por las tesorerías á los introductores de colonos en razon de esta ley.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario á su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular.

Dado en Lima, á 17 de Noviembre de 1849.

ANTONIO G. DE LA-FUENTE, presidente del Senado. — PEDRO ASTETE, vice-presidente de la Cámara de Diputados. — JERVASIO ALVAREZ, Senador secretario. — SANTOS CASTAÑEDA, Diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule, y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la casa del Gobierno, en Lima, á 17 de Noviembre de 1849.

RAMON CASTILLA. — JUAN MANUEL DEL MAR

Decreto del 25/07/1853

Declarando ciudadanos por naturalización a varios ciudadanos americanos

Lima, Julio 25 de 1853.

D. 25 de Julio de
1853.
Declarando ciu-
dadanos por na-
turalizacion á
varios extranjeros
que marchan á
Loreto.

Debiendo marchar al territorio de Loreto de cuenta del Estado y en calidad de pobladores los Norte-Americanos Juan Dimiddie, Alejandro Ros, Jorje Enrique Hayden, Andrés J. Hazen, Enrique Freeze, Enós Cowles, Jorje Lord, Santiago L. Davenport, Eliás Kicktor, Guillermo Hogan, Enrique Hardi, J. H. Lee, G. Clark, Isaac N. Lay, Santiago Smith, Andrés Hathacoay y Juan Bruce: los Italianos David Rondaneli y Agustin Cordiglia: los Escoceses Samuel Anderson y Guillermo Muir; y el Chileno José Vildozola; se les concede con arreglo al artículo 168 de la Constitucion, la calidad de ciudadanos por naturalizacion: expídaseles la correspondiente carta y publíquese.

Rúbrica de S. E. — TIRADO.

Ley del 24/01/1866

Estableciendo los casos en que serán considerados peruanos por naturalización los
extranjeros

MARIANO IGNACIO PRADO,
JEFE SUPREMO PROVISORIO DE LA REPUBLICA.

DECRETO:

D. 24 de Enero
de 1866.
Estableciendo los
casos en que serán
considerados peruanos
por naturalización los
extranjeros.

Artículo único.— Serán considerados como peruanos por naturalización, los extranjeros que presten servicios en cualquier buque de guerra peruano, chileno ó de otra potencia aliada del Perú ó Chile, ya pertenezca á la escuadra, ya esté destinado al corso. En cualquiera de estos casos la naturalización se obtiene por el mero hecho de haber sido aceptados los servicios.

El Secretario de Estado en el despacho de Gobierno, queda encargado del cumplimiento de este decreto.

Dado en la casa del Gobierno en Lima, á 24 de Enero de 1866.—*Mariano I. Prado.*—*J. M. Quimper.*

Decreto del 10/09/1866

Disponiendo que los extranjeros residentes en la República paguen su contribución personal en los mismos términos y forma que los peruanos

MARIANO I. PRADO,
JEFE SUPREMO PROVISORIO DE LA REPÚBLICA.

DECRETO:

D. 10 de Setiembre
de 1866.

Disponiendo que
los extranjeros
residentes en la
República paguen
su contribución
personal en los
mismos términos
y forma que los
peruanos.

Artículo único.—Los extranjeros avecin-
dados en el territorio de la República pa-
garán la contribucion personal en los mis-
mos casos, forma y proporción que los pe-
ruanos.

El Secretario de Estado en el despacho
de hacienda y comercio queda encargado
del cumplimiento de este decreto.

Dado en la casa del Gobierno en Lima,
á 10 de Setiembre de 1866.—*Mariano I.
Prado.—M. Pardo.*

Ley del 09/11/1888

Declarando que los extranjeros domiciliados en el Perú pueden adquirir buques mercantes y enarbolar en ellos la bandera nacional

SECCION DE MARINA.

ANDRES A. CACERES.

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la República Peruana.

Considerando:

L. 9 de Noviem-
bre de 1888.
Declarando que los
extranjeros domicilia-
rios en el Perú pue-
den adquirir buques
mercantes y enarbo-
lar en ellos la ban-
dera nacional.

1. ° Que conforme á las disposiciones
de los Códigos, tienen los extranjeros
capacidad legal para adquirir bienes en
la República;

2. ° Que está establecido tambien en
las leyes relativas al comercio que la
propiedad de las naves mercantes pue-
de recaer indistintamente en toda per-
sona que tenga aquella capacidad; y

3. ° Que es necesario fomentar la ma-
rina mercante nacional, para dar incre-
mento al comercio y á la industria.

Ha dado la ley siguiente:

Art. 1. ° Los extranjeros domicilia-
dos en el Perú pueden adquirir la pro-
piedad de buques mercantes y enarbo-
lar en ellos la bandera nacional, que-
dando sujetos á los mismos deberes y
responsabilidades que imponen las leyes
á los peruanos.

Art. 2. ° Quedan derogadas todas las
disposiciones expedidas anteriormente,
en cuanto se opongan á la presente ley.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumpli-
miento.

Dada en la Sala de sesiones del Con-
greso en Lima, á 25 días del mes de Oc-
tubre de 1888.

M. CANDAMO, Presidente del Senado.
MANUEL MARÍA DEL VALLE, Presiden-
te de la Cámara de Diputados.

Leonidas Cárdenas, Senador Secre-
tario.

Daniel de los Heros, Diputado Secre-
tario.

Al Excmo. Señor Presidente de la Re-
pública.

Por tanto:

Mando se imprima, publique, circule
y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la Casa del Supremo Gobierno
en Lima, á los 9 días del mes de Noviem-
bre de 1888.

ANDRÉS A. CACERES.

Elias Mujica.